

NUESTRA AMÉRICA XXI

DESAFÍOS Y ALTERNATIVAS

GRUPO DE TRABAJO CLACSO
CRISIS Y ECONOMÍA MUNDIAL



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

#42

Abril 2020

SECCIONES:

2 - 8
Crisis y Economía Mundial

9-16
Países y Regiones

17- 25
Temas

26
Gráficas y Estadísticas

¡NO ES EL CORONAVIRUS, ESTÚPIDO! ES UNA NUEVA FASE DE LA CRISIS DEL CAPITAL

ARTURO GUILLÉN*

La economía mundial enfrenta una nueva crisis que amenaza con hundirla en una recesión igual o peor que la de 2008-2009. Este nuevo terremoto económico es atribuido en los medios del establishment, al brote de la epidemia del nuevo coronavirus Covid-19, el cual apareció a finales de 2019 en la provincia china de

La economía mundial enfrenta una nueva crisis que amenaza con hundirla en una recesión igual o peor que la de 2008-2009.

Wuhan. El nuevo virus se convirtió en una pandemia mundial y, en el momento de la redacción de esta nota, afecta a más 200 mil personas de más de 140 países. Debido a la rápida propagación del virus, las autoridades chinas y coreanas decidieron la aplicación de drásticas

medidas de contención, las cuales afectaron severamente a las cadenas de valores globales construidas con la globalización neoliberal a lo largo de treinta años. Esta interrupción de la producción y del comercio internacional se agravó seriamente con la extensión mundial de la epidemia.

En enero de este año las bolsas de valores, que habían acumulado ganancias formidables desde 2010 (gráfica 1), mostraron los primeros signos de volatilidad. Los problemas se agravaron en febrero ante la decisión de Rusia y Arabia Saudita, dos de los principales productores de petróleo, de no recortar los volúmenes de producción, lo que disparó el colapso de los precios del crudo. Esta decisión, ligada a la extensión de la pandemia a Corea del Sur e Italia, profundizó la inestabilidad de los mercados financieros. Las bolsas iniciaron una caída libre (gráfica).

Entre el 16 de febrero y el 17 de marzo del presente año, el índice Standard and Poors de la bolsa neoyorkina presentó una baja del 29%, el Stoxx 50 europeo del 36% y la bolsa de To-

kyo del 27%. Bajo cualquier circunstancia, una baja de ese calibre es a todas luces un crack. El derrumbe de las bolsas no sólo significa una pérdida colosal de capital ficticio en el mercado bursátil, sino que trastoca y distorsiona el funcionamiento del conjunto de los mercados financieros, lo cual origina una crisis de liquidez. (Ver gráfica 1.)

Con todo lo importante que es el coronavirus y los costos implicados en su contención, así como las pugnas geopolíticas en torno a la producción petrolera, no son suficientes para explicar la crisis económica actual ni son sus causas de fondo. Son en todo caso, sus detonadores. No se trata, por lo tanto, de la crisis financiera del coronavirus, sino de una nueva etapa de la crisis del capitalismo. Culpar al coronavirus de la crisis es, más que nada, una construcción ideológica de los sectores de punta de la oligarquía financiera y de los medios de comunicación a su servicio, para ocultar las contradicciones del sistema y confundir a la población. Por detrás de

Gráfica 1
Indicadores de las principales bolsas de valores del mundo 2007.01 - 2020.03



Fuente: Elaboración propia con datos de mx.investing.com

esos factores, existen tendencias estructurales que el capitalismo viene arrastrando desde hace varias décadas y, sobretudo, desde la crisis económica-financiera de 2007 [Guillén, 2015, *La crisis global en su laberinto*, Editorial Nueva-UAM, Madrid; Guillén, 2019, "USA's trade policy in the context of global crisis" en *Brazilian Journal of Political Economy*, vol. 39, n° 3 (156), pp. 387-407, jul-sep.].

Estas tendencias irrumpieron violentamente a la superficie con esta nueva crisis. Entre ellas se encuentran la declinación hegemónica de Estados Unidos y su creciente rivalidad con China y otras potencias regionales (Rusia, Irán y Turquía); la tendencia al estancamiento económico; la persistencia de las tendencias defla-

cionarias; la desglobalización; y la irrefrenable financiarización, o, en términos más precisos, la existencia de un régimen de acumulación dominado por los finanzas, entendidas estas no como el dominio de los bancos, sino como un *fenómeno horizontal* del cual son partícipes los sectores de punta del capital "industrial", los cuales se benefician al igual que los bancos, las instituciones financieras, las compañías aseguradoras y la llamada "banca en la sombra" del dominio que ejercen sobre la emisión y circulación del capital ficticio.

La llamada era dorada del capitalismo correspondiente al periodo de la segunda posguerra, terminó con la "gran crisis" de los años 70s, atribuida por la mayoría de los estudiosos serios de

la época a la caída de la tasa de ganancia en la mayoría de los países capitalistas desarrollados. El sistema "salió" de la crisis mediante diversos expedientes neoliberales que implicaron mutaciones estructurales en el funcionamiento del sistema. A través de la globalización productiva, comercial y financiera y la deriva hacia la financiarización, el capitalismo logró elevar la tasa de ganancia –sobretudo del capital monopolista-financiero (CMF)– mediante su expansión a los países de la periferia, principalmente China y los países asiáticos. Con ello el CMF se aprovechó de las diferencias en los valores nacionales de la fuerza de trabajo de estos países para aumentar la rentabilidad de su capital. Sin embargo, lo hizo al precio de fragilizar las estructuras financieras, lo que llevó a las crisis de los países emergentes en los noventas, la crisis de los valores tecnológicos en 2001, hasta desembocar en la crisis económico-financiera de 2008, la más grave y compleja de las últimas décadas.

A pesar de su profundidad, las elites en el poder no promovieron ningún cambio de fondo en el funcionamiento del sistema. De acuerdo con Dessai:

"La crisis de 2008 había sido un momento

No se trata, por lo tanto, de la crisis financiera del coronavirus, sino de una nueva etapa de la crisis del capitalismo. Culpar al coronavirus de la crisis, es más que nada una construcción ideológica de los sectores de punta de la oligarquía financiera y de los medios de comunicación a su servicio, para ocultar las contradicciones del sistema y confundir a la población.

previo de verdad. Sin embargo, no condujo a una reorientación política seria, solo a una socialización de montañas de deudas privadas, ya que los bancos considerados “demasiado grandes para quebrar” fueron rescatados y sus ejecutivos considerados “demasiado grandes para encarcelar” continuaron sus viejas prácticas. Solo los mortales comunes perdieron hogares y empleos y tuvieron que lidiar con la imposición de la miseria de la austeridad en nombre de la consolidación de las finanzas de los gobiernos” (Dessai, 2020, *The Unexpected Reckoning: Coronavirus and Capitalism. Canadian Dimension*, 17 de marzo).

Para superar la Gran Recesión de 2008-2009 no bastó con reducir las tasas de interés de referencia a cero, sino que fue indispensable incursionar en “aguas desconocidas” mediante la implementación de los programas de flexibilización cuantitativa que inundaron de liquidez el sistema. La depresión tan temida fue evitada,

en 2007.

Es en este contexto de una recuperación productiva lenta y reptante, aunada a una burbuja especulativa sin precedente en las bolsas y en los mercados financieros, cuando el coronavirus atrapa al capitalismo con los dedos en la puerta.

El castillo de naipes del capital ficticio se ha derrumbado de nuevo provocando una crisis financiera y crediticia de gran calado. La decisión de la Reserva Federal (FED) de EUA de reducir en dos sesiones no programadas la tasa de interés al 0-0.25% y reanudar los programas de compra masiva de obligaciones, resultó totalmente inefectiva. Por el contrario, acrecentó el pánico financiero. Su esterilidad no debería sorprender a nadie, pues como lo postuló Keynes durante la gran depresión de los años 30: en condiciones de incertidumbre radical, la política monetaria sirve de poco. De allí que sean cada vez más las voces de quienes piden el uso de instrumentos fiscales, inclusive si esto implica la

Es en este contexto de una recuperación productiva lenta y reptante, aunada a una burbuja especulativa sin precedente en las bolsas y en los mercados financieros, cuando el coronavirus atrapa al capitalismo con los dedos en la puerta.

pero la reactivación productiva fue mediocre. La economía estadounidense no logró rebasar el umbral del 2% de crecimiento anual, y el desempeño del resto de los países desarrollados fue aún peor. La tasa de inversión no se reactivó, a pesar del mar de liquidez y de la reducción de los impuestos a los más ricos decretada por Trump al inicio de su mandato. El régimen de acumulación dominado por las finanzas se mantuvo incólume. La llamada Ley Dodd-Frank, fue un esfuerzo *light* por restablecer cierta regulación, pero su aplicación fue adaptándose a los intereses de *Wall Street*. En otras palabras, *Business as usual*. Contra lo que se esperaba al terminar la Gran Recesión, en el sentido que dada su gravedad, los agentes económicos reducirían su nivel de endeudamiento, sucedió exactamente lo contrario. Al cierre de 2020, la deuda total alcanzó el 330% del PIB mundial, muy por encima del 269% que había registrado

generación de déficit presupuestales.

Las perspectivas de una recesión global son más que probables. Ello afectará con fuerza a América Latina. El asunto no es ahora de si habrá recesión, sino saber cuál será su profundidad. Mucho dependerá no sólo de la rapidez con que se controle la pandemia, sino de la voluntad que se tenga para cambiar el rumbo de las políticas públicas y abandonar el recetario neoliberal.

* México, GT *Crisis y Economía Mundial*, UAM-Iztapalapa.



LA PANDEMIA COVID-19 AGRAVA LA CRISIS CAPITALISTA

JULIO C. GAMBINA*

El coronavirus y sus impactos, como las políticas para confrontarlo, evidenciaron los problemas económicos de la economía mundial, los que vienen de lejos.

Una señal fue en 1999 la debacle de la “nueva economía” de las empresas “punto.com” y la batalla de Seattle, proceso desplegado hasta el 2001. Fue entonces, con el episodio de las “torres gemelas” que se desencadenó una respuesta desde el Estado, a caballo de la ampliación del crédito y el gasto militar. El propio Estado capitalista, difusor de las políticas neoliberales, acudió al Estado para sustentar la lógica del capital. Fueron mecanismos económicos y políticos que se adoptaron para superar la caída de la actividad económica y renovar las formas de dominación mundial.

El límite se presentó en 2007 como crisis hipotecaria, ampliada en 2008 con la caída de Lehman Brothers y la recesión mundial del 2009. La respuesta supuso una gigantesca intervención estatal con emisiones millonarias en el capitalismo desarrollado para hacer viable el funcionamiento del sistema. Junto a la emisión se procesó una inmensa desregulación bancaria, dando lugar a la emergencia de los actuales Fondos de Inversión, la “banca en las sombras”, que administran activos fijos y financieros del capital transnacional, por montos superiores a los PBI de los principales Estados nacionales del capitalismo mundial.

La coyuntura de crisis mundial 2007/09 fue el comienzo del fin de las políticas liberalizadoras instrumentadas a la salida de la crisis de los 60/70, las que se iniciaron como ensayo en el Cono Sur de América bajo dictaduras genoci-

das sustentadas en el terrorismo de Estado. La forma de salida de esa crisis es lo que se denominó “neoliberalismo”, en cuanto corriente hegemónica de la política económica en el sistema mundial. En simultáneo a ese proceso de emergencia neoliberal, China se incorporó fuertemente al sistema mundial desde la modernización operada desde 1978. Ahora estamos en pleno despliegue de una crisis mundial del neoliberalismo, con la novedad que se discute quien hegemoniza el nuevo orden mundial, y por eso la guerra comercial entre EE.UU. y Chi-

El coronavirus y sus impactos, como las políticas para confrontarlo, evidenciaron los problemas económicos de la economía mundial, los que vienen de lejos.

na, o las respuestas nacionalistas y proteccionistas de Trump o del Brexit, de Bolsonaro y varios regímenes derechistas.

Por eso, más allá de cualquier análisis, la “retórica proteccionista” en tiempos de transnacionalización de la economía responde a la crítica de la globalización construida por más de cuatro décadas desde el ensayo sudamericano del terrorismo de Estado. Tanto EE.UU. como el Reino Unido, entre muchos, pretenden barajar y dar de nuevo, pero como actúan otros, espe-

cialmente China y sus alianzas, se transforma en una lucha que se juega a varias bandas. Claro que también intervienen en el debate quienes imaginan espacio para la restauración de las políticas keynesianas, hegemónicas entre 1930 y la instalación de la lógica hegemónica por el neoliberalismo. En ese sentido se inscribe la campaña demócrata de Bernie Sanders en EE.UU., o la prédica del laborista James Corbyn en Inglaterra, tanto como los postulados que emanan desde el Vaticano, con los diálogos entre el Papa Francisco y el Nobel 2001 Joseph Stiglitz. El reciente Grupo de Puebla, que se asienta en la nueva dinámica de los procesos políticos en México y Argentina, transitan por esta referencia intelectual y de proyecto político. Menos visible resulta la voluntad alternativa, anticapitalista, con límites muy importantes para instalar un sentido común global favorable a una expectativa de transición sistémica por la transformación social.

Disputa del orden

No solo hay dimensión política de esta disputa hegemónica, sino que transcurre sobre un trasfondo de innovación tecnológica y de las formas que asumen las relaciones sociales de producción, especialmente entre el capital y el trabajo, y muy en particular, el papel o función que asume el Estado, no solo en cada país, sino en la articulación de capacidad global de subordinación y domesticación desde la institucionalidad mundialmente construida desde los Organismos Internacionales, las Naciones Unidas y sus agencias, el G20, entre otros. La recesión en curso estimula y acelera aspiraciones dominantes para revertir derechos sociales e inducir nuevas formas de gestión y explotación de la fuerza de trabajo, caso del “teletrabajo” o el despliegue de las economías de plataforma, el acelerado proceso de utilización de la inteligencia artificial y otras formas de la llamada economía del conocimiento.

La pandemia desató con diferente ritmo, políticas pasivas, al estilo EE.UU., Gran Bretaña o Brasil, entre los más destacados, que ante el agravamiento fueron modificando y avanzaron en políticas de aislamiento de las personas y baja de la actividad económica, las que involucran a más de la mitad de la población mundial,

e impactan en la reducción de la producción, afirmando un destino recesivo. Dice la titular del FMI: “el crecimiento global en 2020 caerá por debajo del nivel del año pasado”. Sigue diciendo que “La prioridad número uno en términos de respuesta fiscal es garantizar gastos de primera línea relacionados con la salud para proteger el bienestar de las personas, cuidar a los enfermos y frenar la propagación del virus” (Krisalina Georgieva. Blog del FMI, 4 de marzo del 2020).

No hay que confundirse. El FMI no viró hacia el keynesianismo, sino que, como en ocasiones anteriores, los sectores dominantes acuden al

No hay que confundirse. El FMI no viró hacia el keynesianismo, sino que, como en ocasiones anteriores, los sectores dominantes acuden al Estado para resolver los problemas del capitalismo.

Estado para resolver los problemas del capitalismo. En todo caso, el temor subyacente es el despliegue del conflicto ante la pérdida de empleo, la caída de los ingresos populares, el empobrecimiento, etc. Son opiniones vertidas por el FMI ante la necesidad de ampliar el gasto en salud, disminuido por la lógica de las privatizaciones impulsada desde el neoliberalismo. La ausencia de camas, respiradores, infraestructura hospitalaria e insuficiente material para la seguridad del personal afectado a la salud, evidente ahora con el COVID-19, expresa el resultado de una lógica orientada al mercado y a un gasto público privilegiando un rumbo para la militarización.

Por eso destaca en la coyuntura la política de derecho a la salud propiciada en Cuba desde el comienzo de la revolución en 1959, e incluso la capacidad de confrontación contra el coronavirus desde la planificación estatal en China. Nuevamente está en debate el sentido del accionar estatal, en favor de qué intereses en particular. El Estado capitalista desde la crisis del 1930 interviene para sostener al orden capitalista, tal como

se evidencia en las gigantescas emisiones de salivataje de estas horas en EE.UU., Europa o Japón. Lo que también habilita a pensar en el sentido de un Estado para la transición, en el camino de la experiencia cubana y si se quiere, con matices, de la situación en China. Todo un tema para discutir en la coyuntura y la perspectiva del futuro a la salida de la pandemia.

Así como se discute el Estado, se habilita el debate sobre el impacto del modelo de producción sobre la Naturaleza. Al parar la producción mundial en varios territorios, producto del “aislamiento” o cuarentenas de la población para evitar contagios, ocurrió una disminución en la generación de gases contaminantes, claro que ello no elimina la concentración tóxica en el medio ambiente.

La menor contaminación por cierres parciales o totales de las producciones nacionales nos hace pensar en la potencialidad de aminorar el efecto de la crisis ecológica. Claro que no debemos engañarnos con “cielos limpios” por el paro de la producción, ya que se trata de un fenómeno solo temporal, y puede recrudescer si todo vuelve a la “normalidad” luego de las cuarentenas o aislamiento. La amenaza ambiental es el modelo productivo sustentado en energía no renovable y con objeto de ganar y acumular, puesto en evidencia con la pandemia del coronavirus. Es bueno pensar que el ambiente mejora si no es afectado por formas de producción que deterioran la naturaleza y, por ende, nuestra vida.

Así como se discute el Estado, se habilita el debate sobre el impacto del modelo de producción sobre la Naturaleza.

* Argentina, GT *Crisis y Economía Mundial*, Presidente de SEPLA y de la FISyP.



CRISIS SANITARIA Y DESASTRE ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA EUROZONA

LUIS ENRIQUE CASAIS PADILLA*

De todos es conocido que una de las consecuencias más visibles de la crisis de 2008 fueron los recortes impuestos en sanidad; hasta 56 países, ricos y pobres, recortaron sus presupuestos en este vital servicio. En el momento actual de crisis sanitaria mundial, los gobiernos de los principales mundiales están abandonando la disciplina presupuestaria... excepto en la Eurozona.

Mientras el Senado de los Estados Unidos acaba de aprobar el mayor rescate económico de su historia -dos billones de dólares en ayudas a empresas y ciudadanos- para afrontar la crisis descomunal que está desatando la pandemia del coronavirus, los ministros de Economía y Finanzas de la Zona del Euro "han acordado" proponer al Consejo Europeo que la respuesta financiera a la catástrofe del Covid-19 sea que los países que lo necesiten recurran a un préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Frente a la petición de los países del sur, con Italia y España como líderes de ese grupo, para que la UE mutualice la responsabilidad de los enormes gastos que se deberán acometer para evitar una grave crisis económica en cuanto termine la crisis sanitaria, Alemania y los Países Bajos vuelven a imponer la ideología ultra liberal que condenará al sur de la UE a una recesión aún peor que la vivida en los años posteriores a la crisis de 2008.

En la pasada reunión, las declaraciones del ministro holandés "No veo ninguna circunstancia en la que Holanda podría estar de acuerdo con la emisión de Coronabonos" fueron calificadas por su homólogo portugués de "Repugnantes. Inconsciencia absoluta, mezquindad

recurrente". Estos vocablos rara vez se escuchan en la sofisticada diplomacia europea, lo cual nos da una idea de lo que está en juego en estos momentos.

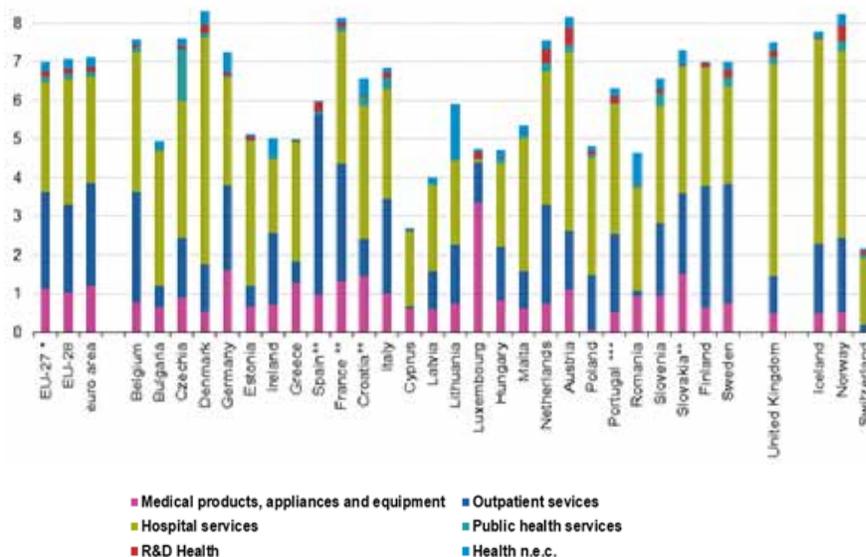
Según los países del norte, encabezados por Alemania y Holanda, el sur debía haber ahorrado más durante los últimos años de mejoría económica. "Si lo hubieran hecho, ahora podrían tener espacio para responder". Por tanto,

De todos es conocido que una de las consecuencias más visibles de la crisis de 2008 fueron los recortes impuestos en sanidad

si algún país necesita ayuda, será con un préstamo del Fondo de Rescate; y, por tanto, para acceder, deberá aplicar las mismas reformas estructurales que se encuentran en el epicentro del deterioro de las finanzas y de los sistemas sanitarios de los países del sur.

Lo que parecen olvidar los países del norte europeo es que la pasada crisis, resuelta con los mecanismos que vuelven a proponer colocó a Grecia, Islandia, Portugal, España e Italia en los cinco primeros países que más recortaron en sanidad de toda la OCDE. El gasto en Sanidad en España es de 3.300 euros por habitante, la mitad de lo que gasta Alemania, por lo que España tie-

Gasto en sanidad Países Unión Europea (% del PIB 2018).



* from 1 February 2020

** provisional

*** estimated

Source: Eurostat (gov_10a_exp)

eurostat

Fuente: Eurostat. 2018.

ne hoy 30,1 sanitarios por cada 1.000 habitantes, frente a los 60 de Francia y Reino Unido o los 71 de Alemania (Véase gráfica 1).

Este “acuerdo” será un absoluto mazazo a los millones de trabajadores del sur de Europa que van a sufrir una nueva terrible crisis económica impuesta por la sinrazón de los dirigentes del norte europeo.

Que el mecanismo de “rescate” propuesto para activar la recuperación de las economías europeas sea el MEDE, frente a otras alternativas propuestas por la mayoría de los países de

estancamiento y recuperación) o, si no se hacen las cosas bien, una en forma de L (caída y estancamiento).

En este contexto, ¿por qué el norte de la Zona Euro está condenando a los países del sur de la Unión a recesiones en U o L al no aceptar mutualizar los enormes gastos que necesariamente se van a tener que llevar a cabo para reactivar la economía, tal y cómo van a hacerlo Estados Unidos?

A pesar de que la pandemia es global, la estructura económica de cada país miembro de la Unión influye, y mucho, sobre la velocidad con

El golpe económico que está provocando el parón económico asociado a la emergencia sanitaria va a ser exorbitado, con los bancos de inversión previendo para la Unión Europea las mayores caídas del PIB desde la II Guerra Mundial.

la Unión -los llamados Coronabonos- no sólo es ineficiente, sino también tremendamente injusto en este momento tan crítico.

El MEDE es una entidad financiera creada por los 17 estados miembros de la zona euro en 2012 con el objetivo de proporcionar ayuda financiera mediante préstamos a los gobiernos que lo necesiten. El problema radica en que el gobierno que lo solicite está pidiendo un “rescate”, que debe ser aprobado por la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE); y para acceder a los fondos deberá aceptar un Memorandum of Understanding (MoU) por el cual se imponen al país una serie de condiciones de obligado cumplimiento en materia de política económica y fiscal, raíz de los recortes aplicados en sanidad, educación, empleo público, etc.

El golpe económico que está provocando el parón económico asociado a la emergencia sanitaria va a ser exorbitado, con los bancos de inversión previendo para la Unión Europea las mayores caídas del PIB desde la II Guerra Mundial. Por tanto, el objetivo central debe ser que una vez terminada la crisis sanitaria se ponga a toda velocidad la maquinaria económica y social para tener una recuperación en V (caída y recuperación rápida), frente a una en U (caída,

la que se pueden recuperar del parón económico asociado a la crisis sanitaria.

La mayoría de los analistas coinciden en que una vez acabada la crisis sanitaria, la industria será el motor de la rápida recuperación. En este contexto, el industrializado norte confía en que una vez pasada la crisis sanitaria, podrán volver a poner a toda velocidad su maquinaria productiva y superar rápidamente la crisis económica, consecuencia del obligado parón por la crisis sanitaria. Como ejemplo, Alemania tiene un PIB industrial que supone el 21% frente al de España que solo supone el 12,6%.

En lo que se refiere al peso de la industria con relación al PIB, España está muy por debajo de la media europea y su declinar ha sido constante desde los años 80 en que se impuso su desmantelamiento como condición necesaria para poder entrar en la entonces Comunidad Económica Europea; y que se vio acelerado a partir del Tratado de Maastricht, ya que con la Moneda Única se impusieron unas condiciones imposibles para el desarrollo de la industria en los países más atrasados de la Unión.

Mientras la Comisión Europea insiste desde hace años en crear planes específicos para que el sector industrial alcance el 20% del PIB comunitario, en el actual statu quo de la Zona Euro

A pesar de que la pandemia es global, la estructura económica de cada país miembro de la Unión influye, y mucho, sobre la velocidad con la que se pueden recuperar del parón económico asociado a la crisis sanitaria.

es imposible un desarrollo de tal envergadura. Y los industrializados países del norte no tienen ningún interés en perder ni sus privilegios, ni sus excedentes comerciales, desarrollando industrialmente a sus socios del sur.

Por otra parte, Francia, España e Italia son el primero, segundo y quinto país receptor del mundo de viajeros internacionales, con 89, 83 y 62 millones anuales; y países como Grecia y Portugal -con 30 y 23 millones de viajeros- dependen todavía más, si cabe de la industria del turismo para cuadrar sus balanzas de pagos; especialmente Grecia, dada la precaria situación actual de su economía, resultado justamente de las políticas de rescate impuestas en 2012 con los mismos mecanismos que hoy se pretenden volver a implantar en la solidaria Eurozona.

El sector turístico está siendo uno de los principales perjudicados. Peor, a diferencia de la industria, no se recuperará una vez se levante el Estado de Alarma. Dado el carácter novedoso e imprevisible de la enfermedad, ya se estima que ésta podría resurgir, por lo que los Estados tratarán de evitar un nuevo rebrote, imponiendo medidas preventivas que eviten una nueva crisis sanitaria como evitar grandes reuniones (congresos, conciertos, playas abarrotadas...), mantener cierto distanciamiento social, etc. En China ya están aplicando normas de comportamiento social como no viajar a los países afectados y poner en cuarentena de 14 días a cualquiera que venga del extranjero.

Es obvio que si un turista va a tener que estar 14 días confinado, simplemente no va a viajar; además, los Gobiernos recomendarán no viajar a España, Italia, etc., pues de esa manera, no solo aseguran la salud de sus compatriotas, sino

que facilitarán la recuperación de la economía propia al evitar el gasto turístico que anualmente se realiza fuera de sus fronteras.

Cuando España, Italia, etc., entren en esa fase, no volverán rápidamente a la normalidad. Para el caso de España, no existirán los 83 millones de viajeros que el año pasado gastaron 92.278 millones de euros; y, por tanto, tampoco se habrá creado a final de año el 12% del PIB y el 13% del empleo directo de 2019. Este impacto lo sufrirán en mayor o menor medida todos y cada uno de los países del sur de la Unión. Estamos hablando de un parón completo del sector turístico, vacacional y de negocios, que en el caso de los países mencionados va a suponer una crisis todavía peor que la de 2008, dada la ausencia de estímulos económicos que el resto del mundo sí van a implementar.

Tal y como apuntan las cosas, la única posibilidad de que el sur de Europa tenga una recuperación en V –o al menos en U– es que se logren tratamientos efectivos y vacunas contra el coronavirus. Eso no es tarea fácil, ni rápida en el tiempo. Así que, nuestros “socios” de la Eurozona nos condenan a la miseria.

Dada la insolidaridad e intransigencia de los dirigentes de la UE que imponen estas normas, ya probadamente ineficaces, quizás éste sea el momento de que los países del sur establezcan un frente común que impida que la década de 2020 sea una Década Perdida.

El peligro de que millones de trabajadores y familias de los países del sur pasen por situaciones mucho más extremas de las recientemente vividas exige tomar decisiones y aplicar soluciones contundentes. Si los países del norte se empeñan en mantener su interesada ideología para conservar sus privilegios, es probablemente el momento de abandonar la Zona del Euro.

Solo fuera de esté inútil corsé, los diferentes países europeos podrán encontrar un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado que permita el desarrollo social y de las fuerzas productivas en Europa.

* España, GT *Crisis y Economía Mundial*. Profesor Colaborador Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid.

ENTRE LA CRISIS Y LA PANDEMIA: LA ENCRUCIJADA DEL PARAGUAY

SOCIEDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA DEL PARAGUAY*

Una crisis estructural

En el año 2008 estallaba la crisis financiera en el sistema inmobiliario de los Estados Unidos, con las denominadas hipotecas *sub prime*, haciendo temblar las bases del ya extinto “estado de bienestar” al extenderse sus efectos sobre el resto de la economía mundial, en especial sobre Europa y los países más débiles de la unión, como España, Grecia y Portugal, con desastrosas consecuencias para la población más vulnerable, mientras las políticas económicas se direccionaban al rescate del sistema financiero. Los efectos de esta crisis no llegaron a la región sino hasta el 2013, en donde la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional dejó entrever la debilidad estructural de las economías latinoamericanas dependientes de la renta.

Lejos de superarla, los coletazos de esta crisis se sienten hasta hoy. En el año 2019 la economía mundial registró el crecimiento más bajo de toda la década, siendo apenas del 2,3% según datos del Banco Mundial, resultado también de las disputas geopolíticas entre las dos economías más importantes del mundo: China y Estados Unidos. Las proyecciones de los organismos internacionales indicaban una modesta aceleración económica, de apenas 2,5% esto antes de que estallara la pandemia del Covid-19 en China, poniendo, una vez más, en jaque a la economía mundial, echando por tierra todos los pronósticos de recuperación de la actividad económica global.

La economía paraguaya no es la excepción, altamente vinculada al mercado internacional, entraba en recesión técnica en el segundo tri-

mestre del 2019, en donde el PIB cayó un 3% entre abril y junio, acumulando una caída del 2,8% al cierre del primer semestre del año pasado como resultado de factores climáticos y la guerra comercial desatada entre China y Estados Unidos que desplazó la producción de soja paraguaya en varios de los mercados de destino.

Para el año 2020 las estimaciones no son nada favorables al sector agroexportador, por

En esta coyuntura recesiva, la sociedad paraguaya en general y los trabajadores en particular lidian con la declaración de pandemia realizada por la OMS el pasado 11 de marzo

un lado, el precio de la soja continúa a la baja, llegando a su precio más bajo de los últimos 10 meses, cotizando en el mercado de Chicago a tan solo USD 301,90 por tonelada, mientras que, por el otro, la zozobra embarga al sector ganadero tras la cancelación de varios contratos de exportación a Holanda y Suiza, dos de los destinos principales de exportación de la carne, como resultado de la pandemia.

En esta coyuntura recesiva, la sociedad paraguaya en general y los trabajadores en particular lidian con la declaración de pandemia realizada por la OMS el pasado 11 de marzo, que ha evidenciado las profundas deficiencias de los sistemas sanitarios a nivel mundial, deteriora-



dos como resultado de la mercantilización de la salud.

Recesión y Pandemia: efectos en la economía paraguaya

A los efectos de una organización social excluyente y groseramente desigual como es la sociedad paraguaya, se añaden los impactos de la pandemia sobre la población trabajadora, tanto en términos socioeconómicos como sanitarios. La declaración de cuarentena ha impactado negativamente en el sector informal de la economía en el que se emplea el 71% de la fuerza de trabajo de la Población Económicamente Activa (PEA), que asciende a aproximadamente 5.024.421 individuos. (EPH, 2019)

La vulnerabilidad de este gran sector de la

familias; siendo los trabajadores de las maquilas los más expuestos. Registrándose en menos de dos semanas más de 600 denuncias por despidos injustificados según el Ministerio del Trabajo y un total de 1.492 personas han quedado sin empleo tan sólo durante este periodo de cuarentena, según informa la Dirección General de Empleo. A la situación de precariedad e inseguridad laboral se añade la perversa especulación con los precios de alimentos de la canasta básica y bienes de primera necesidad, que según la SEDECO han aumentado sus precios hasta un 50% y sin que, hasta el momento, se hayan aplicado medidas que protejan a los sectores más vulnerables.

La crisis desatada por la expansión del COVID-19, ha mostrado en los diferentes países, múltiples debilidades y vulnerabilidades en distintas dimensiones. En Paraguay, entre estas

ha desatendido e incluso atacado a la pequeña agricultura, la campesina e indígena que, a pesar de producir diversidad de alimentos demandados por la población, se ha reducido territorialmente a solo un 6 % de la superficie agrícola del país.

El resultado de la acción del sector privado y el apoyo estatal, ha sido una enorme producción de commodities exportados, y una reducida producción de alimentos para el mercado interno. Por tanto, ante la debilitada producción nacional, se recurrió a la importación, legal e ilegal, de rubros básicos como el tomate, locote, cebolla, ajo, papa, zanahoria, naranja, sandía, mamón, en proporciones que aumentan cada año. La soberanía y seguridad alimentaria ha desaparecido del Paraguay, dando paso a una cada vez mayor dependencia externa para alimentarnos.

Con la pandemia instalada y la suspensión de varias actividades por la política de aislamiento social, esta escasez de alimentos rápidamente empieza a reflejarse en el aumento de precios. En tan solo 10 días, los precios de varios rubros escalonaron, situación observada principalmente en los supermercados: la cebolla aumentó 148%, la papa 138%, la naranja 58% y el tomate 6%. El gremio de supermercados y el Ministerio de Agricultura culparon de la situación a los importadores, mientras que éstos trasladaron la responsabilidad a los supermercados. Sin embargo, nadie reconoce el problema de fondo, la total dependencia de la producción extranjera para nuestra alimentación, y la falta de políticas públicas para la agricultura campesina.

La situación se puede agravar mucho más, de acuerdo a cómo evolucione la epidemia. Algunos medios mencionaron que Brasil ha reducido sus exportaciones frutihortícolas, quedando solo la producción argentina como opción. De agravarse la situación de la pandemia en la región, una hambruna y un mayor deterioro de la calidad alimentaria de la población, no están lejos de nuestro horizonte.

¿Quién pagará los costos de la crisis?

El 23 de marzo, en una nota publicada por ABC Color, Martín Cuadro, presidente de la Asociación de Industrias Autopartistas del Paraguay

Los datos en torno a la situación alimentaria previa a la crisis, ya eran alarmantes: más de 2 millones de personas en situación de pobreza y por tanto, con dificultades para cubrir una buena alimentación; 840.000 personas que pasan hambre

población es resultado de históricas políticas de flexibilización laboral y del nulo interés por parte del Estado paraguayo de garantizar los derechos laborales de la población trabajadora; y esto se evidencia en el hecho de que el país ocupa el quinto lugar a nivel mundial en peor calidad de empleo según el Banco Mundial. La cobertura de seguridad social apenas alcanza al 17% de la PEA, lo que pone al descubierto la inseguridad e inestabilidad que envuelve a la clase trabajadora.

La pandemia y la imposición de cuarentena sólo develó y exacerbó las condiciones de explotación a las que se exponen los trabajadores, pues mucho antes de imponerse esta medida sanitaria, trabajadores de la importadora A.M. Reguera ya denunciaban el no pago de sus salarios desde hacía 3 meses. A este tipo de denuncias se añaden, aquellas realizadas en un contexto de crisis sanitaria, en donde cientos de trabajadores son obligados a trabajar aglomerados, en medio de amenazas y en precarias condiciones, exponiendo sus vidas y las de sus

fragilidades está la situación alimentaria de la población, y detrás de esto, el sistema de producción agropecuario vigente.

Los datos en torno a la situación alimentaria previa a la crisis, ya eran alarmantes: más de 2 millones de personas en situación de pobreza y por tanto, con dificultades para cubrir una buena alimentación; 840.000 personas que pasan hambre; altos índices de desnutrición, así como de obesidad, dan cuenta de una alimentación insuficiente y de baja calidad, con decreciente proporción de alimentos frescos, reemplazados por productos industriales, de menor calidad nutricional.

Detrás de esta situación está el modelo productivo agroexportador, que ha recibido el apoyo del sector empresarial y del Estado en las últimas décadas, para la producción de commodities de exportación, como la soja y maíz transgénicos, además de la ganadería para exportación de carne. Al destinarse la mayor parte de los recursos del país a los agronegocios, entre ellos la tierra, agua, capital público y privado, se

(AIAP), ante la paralización de las actividades en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus que vive el país, ha informado que su gremio ya no cuenta con recursos para cubrir los salarios del mes de abril. Cuadro, señaló que se “avercinan tiempos difíciles” y que urge “definir un plan de ayuda con el Gobierno para la gente y que las empresas no lleguen a una situación de quiebra” y así asistir a los 10.000 trabajadores de la industria maquiladora de autopartes. El presidente de la AIAP agregó “que es una situación compleja que exige la solidaridad de todos, de forma a afectar lo menos posible a los trabajadores del rubro”.

La rama autopartista es la principal de todas en el sector maquilador, en ella se encuentran 16 maquiladoras, con una inversión acumulada de USD 62,085 millones estas empresas absorben a 3,824 trabajadores y registra un volumen de exportación de los últimos tres años que asciende a los USD 991 millones (MIC, 2018/2019;

La rama autopartista es la principal de todas en el sector maquilador, en ella se encuentran 16 maquiladoras

BCP, 2019). THN, Yazaki, Sumidenso, Fujikura y Leoni Wiring System concentran el 80% de la inversión y el 66% de los trabajadores de la rama, lo que significa que alrededor del 80% del valor de las exportaciones de la rama van a parar a estas empresas, o sea, USD 792 millones.

El sector maquilador es de toda la economía nacional la que más beneficios fiscales recibe, se encuentra exento de todo tipo de impuestos y pagan un “Tributo Único del uno por ciento (1%) aplicado sobre el valor agregado al producto dentro del territorio paraguayo” (CEMAP, 2017). Cuentan además con la posibilidad de importar insumos y maquinarias sin impuestos, tampoco pagan el 10% a la ganancia como los demás sectores, frente al 35% de impuestos a las ganancias que podrían pagar en países como Brasil, Paraguay representa un verdadero paraíso fiscal para estas empresas. Teniendo en cuenta que el valor agregado en el país ronda el 35%, o sea USD 277 millones, el impuesto

El sector maquilador es de toda la economía nacional la que más beneficios fiscales recibe, se encuentra exento de todo tipo de impuestos y pagan un “Tributo Único del uno por ciento (1%)”

que estas empresas pagaron en los últimos tres años fue de solo USD 2,7 millones. Por tanto, las ventajas fiscales que el gobierno da a estas empresas son bastante generosas.

Estas cinco empresas se dedican a la producción de arneses eléctricos o sistemas de cables eléctricos para automóviles. Para verificar la capacidad que tienen de pagar los salarios de sus trabajadores, hemos estimado el costo que representa el salario del mes de abril a cada una según la cantidad de empleados, para luego analizar el desempeño de los grupos empresariales a quienes pertenecen para saber realmente si estas no pueden o no quieren pagar la cuenta de la que implica esta crisis sanitaria.

THN, instalada 2012 en ciudad de Itaugua, declaró una inversión de USD 9,3 millones y una ocupación de 726 trabajadores, provee a su matriz THN Brasil y destinan su producción fundamentalmente a marcas coreanas como Hyundai y Kia (MIC, 2018; THN, 2020). THN es una empresa que cuenta con plantas en China, Filipinas, Paraguay y Brasil y se dedica exclusivamente a la producción de sistemas de cableados automotrices.

Según Bloomberg, en el año 2019, la empresa generó a nivel mundial ingresos netos de USD 4 mil millones sin contar las actividades accionarias, asumiendo un promedio de salario mínimo de G. 2.192.839 equivalente a US\$ 331, por lo que el salario de los 726 trabajadores representa un aproximado de 240 mil dólares mensuales.

Otra de las empresas destacadas es Yazaki Paraguay SRL, que opera desde 2013 en la ciudad de Mariano Roque Alonso, de capital japonés y con matriz en Brasil, declaró una inversión inicial de USD 3,3 millones y 529 trabajadores. Haciendo el mismo cálculo, el salario del mes de abril representaría un gasto de 175 mil dólares, según el reporte anual del 2018 de Yazaki, sus ventas netas ascendieron a unos USD 17 mil

millones.

Por su parte, Sumidenso Paraguay SRL, es otra de las importantes de esta rama, con una inversión inicial de USD 4,4 millones y ocupa a 800 personas, esta empresa de capital brasileño instalada en la ciudad de Capiatá, también produce arneses eléctricos que destina a Sumidenso Do Brasil. Sumidenso es la filial del sector automotriz de la japonesa Sumitomo Corporation, que distribuye los sistemas de cableados a marcas como Honda, Yamaha, Fiat, Toyota, Nissan y Mitsubishi. Según su reporte financiero anual, en el año 2019, Sumitomo Corporation registró un lucro anual de USD 320 mil millones, mientras que los activos totales ascendieron a 7,9 billones de dólares. El salario del mes de abril de los ochocientos trabajadores de la maquiladora Sumidenso suma apenas USD 264 mil.

Asimismo, Fujikura Automotive Paraguay es una empresa del grupo japonés Fujikura, ubicada en Ciudad del Este, la planta maquiladora que exigió una inversión de USD 30 millones, emplea a 1.071 trabajadores. Esta es la maquiladora autopartista que según registros oficiales mayor fuerza de trabajo ocupa en el país, el costo que representa para la empresa el salario de abril sería de USD 354 mil. Las ganancias del grupo que provienen en un 21% del sector autopartista, 26% del negocio de la electrónica, 1% de sector inmobiliario y en 50% de sus actividades en energías y telecomunicaciones, ascendieron en 2019 a USD 710 mil millones.

Por último, la empresa Leoni, instalada en 2015, de capital alemán y matriz en Brasil, que también elabora cableados eléctricos, con inversión declarada de USD 4 millones emplea a 400 trabajadores. Los ingresos netos del grupo Leoni en 2018 fueron de 73 millones de euros, unos 79 millones de dólares, cuando el salario del mes de abril de los 400 trabajadores sería apenas de unos 132 mil dólares.

Teniendo en cuenta todas las exenciones fiscales

que reciben estas empresas, los volúmenes de ganancia que generan anualmente los grupos a quienes pertenecen, además de la suspensión del pago de los servicios como agua y luz decretada por el gobierno en los días pasados, el gremio autopartista tiene las condiciones suficientes para cumplir con su rol de empleador y garantizar el pago de salarios a todos los trabajadores, no solo el mes de abril sino todo el tiempo que dure la crisis sanitaria.

La apelación del sector a la ayuda por parte del gobierno, realizada por la AIAP con la amenaza de que los trabajadores de estas empresas se encuentran en riesgo de perder sus puestos invita a pensar que este sector no quiere asumir el costo de la crisis y más bien hacer que esta se pague con dinero público, afectando una vez más a quienes menos tienen.

El sector privado reproduce el discurso de solidaridad siempre y cuando no les toquen el bolsillo, tras varios años de condiciones fiscales extremadamente "solidarias", es momento que estas empresas compartan un poco de todo aquello que se llevan del país.

Paraguay (CNCSP), resultado de una encuesta realizada por el gremio a unos 375 empresarios de diversos rubros referidos al comercio y a los servicios, quienes proponen como medidas de contingencia la habilitación de líneas de crédito a corto plazo, reducción de los impuestos, mora en pago de impuestos, exoneración de multas por pago fuera de tiempo y de los intereses que corresponden, eliminación de los plazos para la presentación de los impuestos, la facilidad, postergación o mora en el pago de los servicios básicos, establecer la legislación sobre Trabajo en Casa, reducción de la "burocracia" para la importación y exportación, subsidios para las MIPYMES, moratoria general por 90 días en todos los vencimientos y pagos a realizar por las empresas, reducción del costo de los servicios públicos en un 50% y la moratoria en el pago a IPS, así como la exoneración de multas en IPS, mora y exoneración de multas en bancos, financieras, casas de crédito, etc., subsidio estatal a empleados en zonas de riesgo, refinanciación de créditos, préstamos de entes públicos y privados a largo plazo, revisión de las normativas

Para sostener las medidas propuestas, el Ejecutivo goza de facultades extraordinarias que le permiten redireccionar los fondos aprobados en el PGN 2020 para destinarlos a las entidades que así lo requieran en el contexto de la crisis sanitaria. Para ello, se contempla la suspensión del pago de bonificaciones a trabajadores del sector público. Asimismo, se aprueba al Ejecutivo la contratación de empréstitos hasta USD 1.600 millones elevando el déficit fiscal al 5% y la deuda externa a USD 8.829,4 millones; equivalentes al 22% del PIB a precios corrientes del año 2019; superando, además, las Reservas Internacionales cuyo saldo a diciembre de 2019 fue de USD 8.494,4 millones, según el Banco Central del Paraguay.

La Sociedad de Economía Política viene denunciando el carácter insostenible del endeudamiento externo, así como la escasa voluntad política por parte del gobierno para exigir mayor contribución para el desarrollo a aquellos sectores que obtienen ganancias extraordinarias, como la banca que sólo en el año 2019 reportó utilidades netas de USD 464 millones, el sector de los agronegocios y por supuesto, el de las maquilas que en el año 2019 exportó por un valor de USD 722.652.168 millones, siendo además el sector que mayores beneficios obtiene por parte del gobierno, y cuyas condiciones de acumulación, teniendo en cuenta los beneficios de una economía, como la paraguaya, con un grado de liberalización escandalosa, les permite asumir parte del costo de la crisis.

Sin embargo, el plan del gobierno pretende hacer recaer el peso para sostener este paquete de medidas de emergencia sobre la clase trabajadora, en general, y sobre las empresas y trabajadores públicos en particular, quienes en definitiva terminarán pagando los costos de la crisis como resultado de la estructura de un régimen tributario que beneficia a quienes más ganancias obtienen; pues no es un dato menor que de los cinco grandes contribuyentes tan sólo uno haya pagado el Impuesto a la Renta Personal en el año 2019, y que en este ejercicio fiscal se verán beneficiados con la ley de emergencia, que les permite posponer el pago de los impuestos por las utilidades obtenidas el año pasado y en donde el Estado dejará de percibir ingresos derivados del IRACIS, IRAGRO e IRP, al que se la añade el elevado grado de evasión

La Sociedad de Economía Política viene denunciando el carácter insostenible del endeudamiento externo, así como la escasa voluntad política por parte del gobierno para exigir mayor contribución para el desarrollo a aquellos sectores que obtienen ganancias extraordinarias, como la banca que sólo en el año 2019 reportó utilidades netas de USD 464 millones

¿Qué propone el gobierno?

El Ejecutivo presentaba el 24 de marzo el proyecto de Ley que declara el estado de emergencia sanitaria en el país. Este proyecto, aprobado por ambas cámaras y que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo por el presente ejercicio fiscal, se compone de varios aspectos, por un lado, la asignación de subsidios a la población vulnerable para proteger el consumo durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento, y por el otro, el grupo de medidas económicas de contención de la crisis, las cuales guardan inquietante similitud con las sugeridas por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de

laborales, moratoria en aumento de salarios tanto públicos como privados, eliminación de "beneficios desmedidos" a funcionarios públicos y atención diferenciada a las MIPYMES.

Es importante recordar que el sector de los servicios que incluye servicios a los hogares, telecomunicaciones, comercio, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, culminó el 2019 con un desempeño positivo, registrando un incremento interanual del 4,2% y cerrando el tercer trimestre del 2019 con un crecimiento acumulado del 2,9%, siendo el único sector que mantuvo un desempeño positivo durante el anterior ejercicio fiscal, según refiere el boletín estadístico del Banco Central del Paraguay.

fiscal por parte de grandes contribuyentes.

El impacto económico de esta crisis se sentirá al menos durante los próximos 15 años, como ya lo reconocía Benigno López, ministro de Hacienda; significando en el corto plazo el congelamiento de los salarios en el sector público por al menos 4 años, incluyendo el postergado aumento salarial al magisterio.

Consideramos que los recursos necesarios para enfrentar la difícil coyuntura económica y social no pueden ser obtenidos únicamente sacrificando a las empresas públicas, que ya vienen soportando procesos de descapitalización, y sobre los trabajadores, que constituyen el sector más vulnerable. Urge por tanto, la reestructuración de la deuda externa, siendo además, este el momento preciso, para imponer aranceles a aquellos sectores que mayores ganancias obtienen y que hoy, no quieren asumir parte del costo de una crisis que afecta sobre todo a quienes menos tienen.

En suma, las deficiencias del sistema de salud pública, así como la vulnerabilidad, precariedad e inseguridad laboral de la clase trabajadora para afrontar los desafíos en el marco de una crisis sanitaria mundial, es absoluta responsabilidad del sistema económico vigente y de los sucesivos gobiernos que lo han gestionado, en detrimento siempre, de los más vulnerables.

* Paraguay, SEPPY, Presidenta: Econ. Alhelí Cáceres, Vice presidenta: MBA. Sarah Zevaco.

LA DISPUTA POR EL MODELO DE SALUD EN MÉXICO: ENTRE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y LA NUEVA EPIDEMIA DEL COVID-19

ZAIDA VÁZQUEZ PERALTA*

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue acompañada de la ejecución inmediata de algunas medidas dirigidas a cumplir una de las promesas "eje" de su campaña, el combate a la corrupción. Durante su conferencia matutina del 15 de enero de 2019, hizo un llamado a combatir el *huachicoleo* en la compra de medicinas y reiteró su negación a hacer negocios al amparo del poder público. Una primera acción que se llevó a cabo fue la de consolidar (concentrar) las compras desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que implicó un cambio en el modelo de adquisiciones

la emergencia global del COVID-19 presiona sobre un sector salud precarizado, sobre las finanzas estatales y un tejido público debilitados durante la etapa neoliberal

como mecanismo para combatir la corrupción y el tráfico de influencias en las grandes compras de medicamentos e insumos.

En este marco se desarrolla el problema del desabasto de medicamentos, que ha mostrado las resistencias políticas que enfrenta el Estado para realizar transformaciones en un sector social que fue profundamente mercantilizado, añadiéndose a ello la emergencia global del COVID-19 que presiona sobre un sector salud precarizado, sobre las finanzas estatales y un tejido público debilitados durante la etapa neoliberal.

Desarrollo del desabasto de medicamentos

A partir de mayo de 2019 se presentaron denuncias y protestas ante la falta de medicamentos. Según el Primer Informe sobre el Desabasto de Medicamentos, realizado por la plataforma No al *Huachicol de Medicinas*, había un total de 916 denuncias detalladas y corroboradas por desabasto concentradas en CDMX, Estado de México y Veracruz. Al ISSSTE le correspondían 48.68% y al IMSS el 25.11% de los casos. Los cuatro padecimientos más afectados fueron la diabetes, la hipertensión, el cáncer y el VIH. Se señala que algunas causas del desabasto fueron los cambios en los modelos de compra y negociación para evitar abusos de poder, corrupción, conflictos de interés de farmacéuticas, y que incidieran en disminuir los precios, mejorar la calidad y la eficacia terapéutica.

En septiembre, la revista Proceso en su edición 2239, documentó que el desabasto de medicamentos en el Hospital 20 de Noviembre y en el Hospital Infantil de México para los niños con cáncer había sido detonado por las clausuras en plantas de Laboratorios Pisa y de su filial SAFE que elaboran el fármaco metotrexato, mismas que suministran casi la mitad de la demanda del sector público. Corporación que elevó sus ventas, sólo en el mercado privado, en más del 100% en los últimos 5 años. Las autoridades hallaron el incumplimiento de normas sanitarias, irregularidades operativas, prácticas monopólicas, manipulación y chantaje, licitaciones desiertas, sobrepuestos y confabulación. El gobierno respondió con la compra internacional de emergencia de metotrexato a la firma france-

sa Mylan y acordó suministros con Teva desde Brasil y Argentina. El precio de compra subió sólo en 3% con respecto al precio nacional. El cierre de plantas coincidió con un problema de suministro de medicamentos a escala mundial que continúa hasta la fecha.

En los medios de comunicación se mostraron las acciones contra Pisa como un golpeteo contra las empresas del sector, sin embargo, este proceso se desencadenó por un curso orgánico de sucesos. Primero, en abril de 2019 se descubrió en Jalisco un brote de infección en la nutrición parenteral. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) responde, después de una investigación, clausurando siete de sus 17 plantas por contaminación. Después, la muerte de un niño en Puebla que recibía metotrexato, reveló las malas prácticas de manufactura y el vencimiento del certificado para operar que tuvo como consecuencia el cierre de otra planta, acelerando la crisis del metotrexato. La respuesta de Pisa que fue, más bien, un contragolpe, no se hizo esperar, e

Los conflictos, pese al abastecimiento internacional de medicamentos, no han cesado. Los problemas han derivado en juicios de amparo por desabasto contra el Instituto de Salud de Bienestar

incumplió un contrato con el Hospital Infantil, reteniendo 36 000 frascos de metotrexato que ya se tenían disponibles (argumentando que se habían confiscado) [<https://cutt.ly/nr49MrD>].

El desenlace coloca en el debate un tema fundamental: la conveniencia de que empresas privadas con carácter monopolístico concentren el abastecimiento de medicamentos que son de vital importancia para el tratamiento del cáncer, y que deben formar parte de una estrategia de seguridad social y nacional.

Para noviembre, la SHCP declaró que sí había metotrexato, que nunca hubo desabasto y aseguró que la causa fue la falta de “una

comunicación apropiada entre administradores y médicos”. Responsabilizó directamente a los institutos de violar el derecho a la salud y comenzó una evaluación a los directores de administración de institutos y hospitales. En ese período se suscitaron 3 renuncias, entre ellas la del administrador del Hospital Infantil (coludido presuntamente con Pisa), y la destitución del director del Instituto de Neurología meses después. Revelándose probables escenarios de escasez inducida por los proveedores. Desde el inicio, el desabasto fue atribuido por los opositores al resultado de un supuesto recorte del gasto en salud –lo que fue, más claramente, un estancamiento debido a reestructuraciones del gasto total y a compromisos presupuestarios, 2,5% del PIB en 2018 y 2019 [<https://n9.d/pfda>] –, errores en la concepción de la nueva estrategia para combatir la corrupción y, en general,

cientemente ha sido a causa de los contratos con intermediarios que actúan entre el sector público y el sector privado [<https://n9.d/mh6q>].

Emergencia del COVID-19

En estas circunstancias, llega la pandemia de coronavirus a México, cuyo riesgo de muerte por contagio se eleva con la edad y en las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Lo que tiene efectos, tanto en los países de altos ingresos, por su perfil epidemiológico y etario, como en los países de ingresos medios, donde la preeminencia del perfil crónico, como México, ha sido arrastrada por la extensión de la obesidad (72.5%) y la diabetes (13.1%), según cifras del Health at a Glance 2019 de la OECD, elevando la predicción de afectados graves a un

Aunque se hayan tomado medidas cautelosas, los resultados no están asegurados; además de las contradicciones entre lo dispuesto oficialmente y su ejercicio real. El sector salud y el farmacéutico serán espacios de confrontación y legitimación durante el sexenio.

atribuido al mal diseño de la política pública.

Los conflictos, pese al abastecimiento internacional de medicamentos, no han cesado. Los problemas han derivado en juicios de amparo por desabasto contra el Instituto de Salud de Bienestar (INSABI) otorgados a familias de niños con cáncer, algunos apoyados por el equipo jurídico del PRD en la CDMX. Se han desprestigiado las compras de medicamentos en el exterior al difundirse en medios como El Universal que son medicamentos “precalificados” o “piratas”. Además, la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (UNIFACC), alertó de un posible incremento del 25% en los precios de los medicamentos para este año, debido al aumento de los inventarios de las empresas nacionales. La apuesta del gobierno ha sido la compra de medicamentos a fabricantes, sin intermediarios ni condicionamientos comerciales, fracturando una cadena de circulación y valorización innecesarias. Así, el desabasto re-

7%. Para el 24 de marzo las cifras ascienden a 405 contagios y 5 decesos, inicia la fase 2 de mitigación con 5 casos de transmisión comunitaria, aunque ya se habían anticipado medidas propias de esta fase. Se intensifican las acciones de “sana distancia” y “quédate en casa”. A nivel mundial, la cifra asciende a 414,000 contagios y a 18,500 muertes en 185 países. Italia es el país con mayor número de decesos.

Las medidas tomadas por el gobierno mexicano no han escapado al clima de confrontación política. Una de las críticas lanzadas ha sido la tibieza o la poca seriedad en la fase de contención, con ausencia de medidas drásticas de confinamiento para prevenir la epidemia y la desconfianza de que el sector salud pueda garantizar los recursos humanos, materiales y organizativos, idea que se reactivó con la protesta de enfermeras y denuncia de médicos residentes de algunos hospitales el 24 de marzo, por no disponer de los insumos más elementales y

de capacitación para enfrentar la contingencia. Posicionando nuevamente el problema del abastecimiento, el cual se desenvuelve entre el indudable desmantelamiento del sector salud y la intensiva explotación del personal, la corrupción y la operación política.

Las estrategias seguidas por el gobierno -aprendidas de las experiencias previas y del apoyo recibido por China-, han sido reconocidas por la OMS, al haber actuado antes que otros países con relación al peso relativo de contagiados y decesos y por su sistema de vigilancia epidemiológica [https://cutt.ly/Stnoqg4]. Se han enfocado en minimizar los impactos y mantener un equilibrio entre la contención, con una alerta temprana, y conservando actividades generales aunque en retiro paulatino, conscientes de la fragilidad social causada por la precarización del trabajo, la pobreza y la inevitable dependencia de actividades productivas, comerciales y servicios esenciales para garantizar la reproducción de la vida y que de no garantizarse pudieran derivar en una crisis mayor que la causada por la epidemia.

Urge por tanto, la reestructuración de la deuda externa, siendo además, este el momento preciso, para imponer aranceles a aquellos sectores que mayores ganancias obtienen y que hoy, no quieren asumir parte del costo de una crisis que afecta sobre todo a quienes menos tienen.

“El crecimiento controlado” del contagio para hacerlo asimilable a las capacidades del sector salud ha sido reprochado como parte del “eficientismo” neoliberal. Por un lado, como si fuese técnicamente posible evitar en absoluto los contagios y sus consecuencias, por otro, como si lo fuese evadir las condiciones reales en las que recibió la economía, las finanzas públicas, el sector salud y el mercado laboral el gobierno en turno.

La contingencia aparece como la coartada para exigir al gobierno la radicalización de ciertas medidas y el desmonte urgente de una precarización antípoda del cuidado público de la salud, exacerbando la coyuntura las demandas ultra humanistas, a la par de la mezquindad de la derecha al acecho de la primera señal que anuncie la crisis sanitaria. Otra exigencia ha sido el test masivo, usado en Corea del Sur en menos del 1% de su población, que muestra su inutilidad si no se garantiza el aislamiento total, sólo posible por el control estatal de la movilidad y el disciplinamiento social, y de una economía que lo propicie. Aprovechado, además, para el despliegue del autoritarismo en algunos países.

Los riesgos se incrementan con el posible traslado del epicentro de la pandemia a Estados Unidos y las restricciones que puedan derivar de las relaciones comerciales con éste y en las fronteras compartidas; asimismo por la incertidumbre provocada por la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso. Aunque se hayan tomado medidas cautelosas, los resultados no están asegurados; además de las contradicciones entre lo dispuesto oficialmente y su ejercicio real.

El sector salud y el farmacéutico serán espacios de confrontación y legitimación durante el sexenio. Esta tendencia se confirma con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI a finales del año pasado. Los cambios que amenazan los intereses creados en el sector salud serán respondidos con resistencias organizadas y sabotajes desde los propios espacios de poder corporativo e institucionales que ocupan estas empresas y los grupos políticos vinculados a ellas, pudiendo detonar mayor confusión mediática y presión social.

El tamaño de las resistencias es, desde luego, equiparable, al tamaño de las expectativas y ganancias que se ponen en riesgo. Ir en sentido inverso o frenar un modelo de salud que iba en caída libre hacia la privatización y el lucro, será interpretado como una disputa de poder; y en efecto, lo es. Sin embargo, algunos cambios en el sector seguramente se verán postergados por la urgencia de paliar la pandemia y garantizar la estabilidad. Los esfuerzos se concentrarán aquí y en sus consecuencias. El proceso de cambio no será sencillo, quedará sujeto a las condiciones internacionales y al desarrollo de las con-

tradiciones entre la nueva política de salud y las estrategias de quienes buscan bloquear un proyecto y se resisten a dejar de utilizar al sector salud como un espacio de acumulación de capital.

* México, economista, estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.



DEMOCRACIA FRAUDULENTA Y MAFIOSA

JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ*

Con la evidencia que se ha venido acopiando sobre el fraude orquestado para garantizar la llegada a la presidencia de Iván Duque Márquez, ha quedado una vez más comprobado el carácter corrupto, criminal y mafioso del régimen de dominación de clase, y se ha constatado que -en forma ritual y con las frecuencias establecidas en el ordenamiento constitucional- asistimos a farsas electorales, que son presentadas ante la opinión pública nacional e internacional como una muestra de la solidez de la democracia colombiana.

nacional y local, las fuerzas militares y de policía, también en complejas articulaciones y coordinaciones con el mercenarismo paramilitar.

En un entendimiento amplio de la contrainsurgencia, en cuanto propósito organizado de contención y repulsión de toda consideración de amenaza contra el orden social vigente, se ha asistido a la conformación de una forma muy particular de la democracia, que amparada en la continuidad de la guerra, ha justificado la permanencia de sus rasgos autoritarios y de excepcionalidad permanente, al tiempo que admite

Con la evidencia que se ha venido acopiando sobre el fraude orquestado para garantizar la llegada a la presidencia de Iván Duque Márquez, ha quedado una vez más comprobado el carácter corrupto, criminal y mafioso del régimen de dominación de clase

Lo del “Neñe” Hernández no es más que una contingencia, un accidente inesperado, dentro de un sistema político y de representación, que en sus rasgos esenciales responde a estructuras de dominación constituidas durante décadas, con fundamento en un coctel explosivo cuyos principales ingredientes se encuentran en la alianza explícita o soterrada entre representantes de los poderes políticos y económicos históricamente constituidos, los poderes locales políticos y económicos históricamente establecidos o emergidos, y los “productos grises” de las articulaciones entre economías legales e ilegales. A lo cual se han agregado como pilares del ejercicio violento y represivo del poder en el nivel

fugas mientras éstas no representen una afectación significativa del régimen de dominación. El fraude da cuenta de una disposición preventiva, de carácter estructural, siempre presente en las disputas por el poder derivado de la victoria electoral, lo cual se escenifica como es sabido en diferente escala. Tal disposición no solo ha cumplido un función de preservación y de reproducción del poder; también se ha erigido en factor de acumulación y enriquecimiento mayor, incluso recurriendo al ejercicio estructural de la violencia cuando se ha considerado necesario.

En la elección presidencial de 2018, es evidente que -desde un enfoque de contrainsurgencia- se llegó a considerar que una victoria de

hoy no queda la menor duda de que la pérdida del plebiscito a favor del Acuerdo de paz tuvo que haber sido fraudulenta

Petro representaría una amenaza sistémica, aunque en sentido estricto no lo fuera. En las versiones más extremistas de derecha se trataba de la llegada del “castrochavismo”. A éstas se unieron o adhirieron buena parte de los partidos del establecimiento, incluidos sectores del llamado centro político. Hoy está claro que Duque no llegó a la presidencia a “voto limpio”, y que el caso del “Neñe” no es más que un ejemplo del entramado criminal y mafioso sobre el cual cabalgan sectores de clases dominantes, con un patrón que es bien sabido se repite a lo largo y ancho del país.

No debe producir sorpresa alguna que haya habido una financiación de la campaña del presidente electo con recursos del narcotráfico. Esa es la impronta de todas las campañas electorales de por lo menos las últimas cuatro décadas.

En ese marco, hoy no queda la menor duda de que la pérdida del plebiscito a favor del Acuerdo de paz tuvo que haber sido fraudulenta. Fue tal la perplejidad que produjo ese resultado, que ni siquiera en las valoraciones de esos días aciagos, se llegó a considerar la opción del fraude. Si el acuerdo renegociado, firmado el 24 de noviembre de 2016, ha sido considerado como una amenaza sistémica, qué no se podría decir del primer acuerdo, que en muchos aspectos poseía mayor precisión y contundencia en sus definiciones.

El fraude que llevó a Duque a la presidencia permite evidenciar, por otra parte, la doble moral, el doble discurso, la mentira como recurso perverso de la acción política, que caracteriza a los proyectos políticos de la derecha, particularmente a los de la derecha más extrema y recalcitrante. Tras el velo de lo impoluto, se encuentra lo ruin y sucio; que incluye en este caso el desconocimiento o no reconocimiento de todos los actores y de sus roles en lo que se pensaba era una obra maestra, otra del interminable historial de la democracia fraudulenta. El

beneficiado, hoy presidente de la república, no supo; el innombrable director de la obra dice no conocerla; al “Neñe” lo sacaron de la escana y lo pasaron a la otra vida; la “Caya” duda de su propia voz, y seguramente afirmará que le tocó irse al exilio. En fin... toda una historia truculenta.

En esta trama todavía queda mucha tela por cortar. Está por verse cómo se dispone el aparato de justicia (Por lo pronto está claro que la Fiscalía se hizo la de la vista gorda). También, con qué cortinas de humo será ataviado el escenario.

Lo cierto es que se está frente a una razón más para considerar la ilegitimidad del gobier-

Lo cierto es que se está frente a una razón más para considerar la ilegitimidad del gobierno, para llenar con más argumentos la indignación y sobre todo la protesta y la movilización contra el orden de cosas existente.

no, para llenar con más argumentos la indignación y sobre todo la protesta y la movilización contra el orden de cosas existente. E igualmente, frente a una evidencia más, que al sumarla a las innumerables ya existentes, le da más fuerza a la fundamentación de una reforma político-electoral, como parte del proceso de democratización pospuesto por la no implementación integral del Acuerdo de paz.

Hubo sabiduría en La Habana cuando se acordó que para poder darle cierre a la confrontación armada que por décadas ha persistido en el país, era preciso, entre otras, emprender la tarea democratizadora de las formas de reproducción de la dominación de clase; una de ellas, la correspondiente a la organización y el funcionamiento de la “democracia electoral”. El propósito no se ha cumplido. Los intentos han resultado hasta ahora infructuosos. Se trata de uno de los grandes pendientes del presente.

*Colombia, GT *Crisis y Economía Mundial*, Profesor del Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia.

¿VENEZUELA NARCO ESTADO?

PASQUALINA CURCIO CURCIO*

Falsas acusaciones contra Venezuela y criminales medidas coercitivas de EE.UU. en épocas de pandemia

Mientras la humanidad entera combate día a día a un enemigo invisible aunque muy poderoso, el COVID-19, el gobierno de EE.UU. arremete nuevamente contra el pueblo venezolano.

El 26 de marzo, el Fiscal General estadounidense, William Barr, acusó al presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de “haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína”. (DW, Estados Unidos ofrece 15 millones de recompensa por Nicolás Maduro, 26-03-2020)

Simultáneamente, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, al estilo cowboy y con base en las acusaciones hechas por Barr, fijó un precio a la cabeza del presidente Maduro, así como a otros funcionarios del gobierno. De manera vergonzosa e incitando al delito, informa que entregará 15 millones de dólares a quien entregue a Nicolás Maduro.

Estas acusaciones, por demás infundadas puesto que no están sustentadas con prueba alguna, se suman a las agresiones que el gobierno de Estados Unidos ha desplegado contra el pueblo venezolano desde el año 1999, las cuales intensificó a partir del año 2013 luego de la desaparición física del Presidente Chávez. Se trata de agresiones enmarcadas en una guerra no convencional y multifactorial en lo económico,

psicológico, diplomático, mediático.

Al respecto de las acusaciones es importante resaltar que en primer lugar, violan el derecho internacional por cuanto vulneran la soberanía, en este caso, la de Venezuela. El Fiscal Barr juzga al Presidente Nicolás Maduro en una jurisdicción que no le corresponde.

En segundo lugar, las acusaciones forman parte del plan de EE.UU. para derrocar la Revolución Bolivariana. En un documento titulado

¿qué narco Estado puede existir en un país que ni siquiera figura en las estadísticas de consumo, producción y tráfico de drogas?

“Plan Maestro para derrocar a la dictadura venezolana” publicado en febrero de 2018 y suscrito por el entonces jefe del Comando Sur, se muestra en detalle las acciones para derrocar la revolución bolivariana. Entre dichos planes se encuentran: “Intensificar notablemente la denuncia contra el régimen de Maduro calificándolo de criminal, ilegítimo, ladrón de la riqueza del pueblo venezolano y saqueador del tesoro nacional (...) Hacer uso de la ‘corrupción generalizada’ y de las ‘ganancias originadas por las operaciones de narcotráfico’ para desacreditar su imagen [la de Maduro] ante el mundo y sus seguidores.” (<http://www.elcorreo.eu.org>).

En tercer lugar, la República Bolivariana de Venezuela ni siquiera figura en los informes publicados por la Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito en los que se sistematizan, por país, los datos de producción, consumo y tráfico de drogas ilícitas en el mundo.

En el más reciente informe del año 2019, Venezuela aparece de última en las listas de prevalencia de consumo de drogas (a diferencia de Estados Unidos que la encabeza), no figura en las listas de países que siembran y fabrican drogas (a diferencia de Colombia que es la primera de la lista). Solo figura en la lista de países que han incautado drogas.

Hacerse de las mayores reservas de petróleo y de oro del mundo le ofrecería una gran ventaja a EE.UU. en el marco del reordenamiento económico y político que en estos momentos vive el mundo.

Los niveles son relativamente tan marginales que no amerita su inclusión. En tal sentido la pregunta que surge es ¿qué narco Estado puede existir en un país que ni siquiera figura en las estadísticas de consumo, producción y tráfico de drogas?

De acuerdo con el mismo informe, de las 18 millones de personas que se estima consumen cocaína a nivel mundial, el 38%, o sea 6,8 millones son de América del Norte. La tasa de prevalencia del consumo de cocaína en América del Norte es 2,10%, es decir, 6 veces por encima de la tasa de prevalencia mundial que es 0,37%. (<https://dataunodc.un.org/drugs>).

Muestra el informe que 44,6 millones de personas consumen cannabis (marihuana) en América del Norte, lo que representa el 24% del total de personas que la consumen en todo el planeta, siendo la prevalencia 4 veces mayor que la mundial. (<https://dataunodc.un.org/drugs>)

En 2017 de las 245.400 hectáreas de cocaína que fueron cultivadas, 171.000 estaban en territorio colombiano, es decir, el 69,68%. En cuanto a la fabricación potencial de cocaína 100% pura, de las 1.970 toneladas que se produjeron en ese año, 1.379 fueron fabricadas en Colombia (<https://dataunodc.un.org/drugs>).

[tps://dataunodc.un.org/drugs](https://dataunodc.un.org/drugs)).

¿Cómo logran pasar 1.379.000 kilos de cocaína frente a las narices de las autoridades del Estado colombiano sin que se den cuenta? ¿Cómo ingresan todas esas toneladas de cocaína a EE.UU. sin que el Estado norteamericano se entere de ello? ¿De qué manera 18 millones de estadounidenses trafican droga sin que el Estado se percate? O las autoridades de los Estados colombiano y estadounidense son muy ineficientes, o son cómplices, o forman parte del negocio, o son quienes trafican, o son narco Estados, o todas las anteriores.

La otra pregunta que surge es ¿por qué EE.UU. acusa a Venezuela de narco Estado y no a Colombia?

El origen del conflicto

El empeño de EE.UU. de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro tiene su origen en el temor que genera a los grandes capitales corporativos y financieros, es decir, al imperialismo, que un gobierno distinto al capitalista y neoliberal se consolide y muestre sus logros. En el caso de Venezuela hay que añadir que cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo (300 mil millones de barriles) (OPEC, 2019) y la de oro con más de 7.000 toneladas (Consejo Mundial del Oro).

Hacerse de las mayores reservas de petróleo y de oro del mundo le ofrecería una gran ventaja a EE.UU. en el marco del reordenamiento económico y político que en estos momentos vive el mundo.

China ha desplazado a EE.UU. como potencia económica: el país del norte no solo registra la mayor deuda externa del Planeta, la cual supera los 21 billones de dólares (Departamento del Tesoro de EE.UU., varios años), sino que

además sus reservas internacionales que no superan los 450 mil millones de dólares no le alcanzan para pagar siquiera el 2% de la deuda externa total, que dicho sea de paso, está principalmente, en más del 10%, en manos de los chinos (Banco Mundial, varios años).

EE.UU. necesita 64 veces la cantidad de oro que tiene disponible en sus reservas internacionales para saldar todos sus compromisos de deuda externa. Necesita alrededor de 430.629 toneladas de oro para pagar su deuda completa. No hay tanto oro en el mundo: sobre el suelo hay 193.472 toneladas de oro, bajo el suelo se estiman 54.000 toneladas. Según el Consejo Mundial del Oro hay 245.472 toneladas a nivel mundial. Para pagarle la deuda a China necesita 4,8 veces el oro que tiene de reservas, o sea, más o menos todo el oro que hay en los Bancos Centrales del mundo, 32.107 toneladas.

Por su parte China, con sus reservas internacionales que suman 3,1 billones de dólares, cubre el 189% de su deuda externa total que asciende a 1,7 billones de dólares (Banco Mundial, varios años).

En contraste con EE.UU., desde la década de los 70, la balanza comercial de los chinos ha sido superavitaria: para el año 2018, la balanza comercial de China era de 106.623 millones de dólares. En cambio, para el caso de EE.UU., el mismo año quedó un saldo negativo por 578 mil millones de dólares. Sumemos el hecho de que la mayoría de las importaciones de EE.UU. provienen de China. Mientras la economía china ha crecido 10% en promedio interanual los últimos 50 años, la de EE.UU. lo ha hecho al 2,7%, incluso por debajo del promedio mundial de 3%. (Banco Mundial, varios años).

Acusar de narco Estado al pueblo venezolano constituye una agresión más que pasa a engrosar la lista de las acciones que desde 1999 el

En medio de la pandemia que azota al planeta, queda en evidencia lo inhumano y criminal del imperialismo estadounidense que no solo arremete con acusaciones infundadas contra Venezuela, sino que intensifica las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, dificultando la importación de medicamentos y alimentos.

gobierno de EEUU ha empleado para derrocar, sin éxito alguno, la revolución bolivariana.

En medio de la pandemia que azota al planeta, queda en evidencia lo inhumano y criminal del imperialismo estadounidense que no solo arremete con acusaciones infundadas contra Venezuela, sino que intensifica las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, dificultando la importación de medicamentos y alimentos.

Hoy el pueblo venezolano con mucha conciencia, sigue resistiendo a las agresiones del imperialismo estadounidense, mientras tanto disciplinada y responsablemente guarda cuarentena social para combatir a un nuevo enemigo, el COVID-19.

* Venezuela, GT *Crisis y Economía Mundial*, economista, Dra. en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, profesora del Departamento de Ciencia Económicas y Administrativas de la USB.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: UNA SALIDA EN FALSO DE LA CRISIS

JUAN PABLO MATEO*

Sabido es que las economías de la periferia de la Eurozona (Portugal, España, Italia y Grecia) han sido especialmente golpeadas por la gran crisis del siglo XXI. En términos reales, Portugal sólo consigue recuperar el PIB alcanzado en 2008 una década después, en 2018, mientras en el caso de Italia, su recuperación económica desde 2015 no ha permitido recuperar el nivel de 2007, siendo su PIB en 2019 un 4,3% inferior. Sin duda, el caso más dramático no obstante es el de Grecia, ya que todavía en 2019 el producto era un 23% inferior al logrado 12 años atrás, en 2007 (Eurostat 2020). Sin embargo, España lleva creciendo seis años, y en 2017 su PIB ya sobrepasó el máximo de 2008, y también en cuanto el PIB pc (la mayor parte de los datos de esta nota proceden del Instituto Nacional de Estadística [INE]). Ahora bien, ¿en qué medida cabe afirmar que se han establecido fundamentos robustos para la recuperación?

La crisis económica

Tras la crisis de principios de los noventa, en 1992-93, España inicia una larga fase de crecimiento cuyos registros en términos del PIB

fueron ciertamente destacados. Tomando 1995 como año inicial, el PIB crece a un ritmo del 3,78% anual hasta 2007. La crisis estallaría poco después, en la segunda mitad de 2008, dando lugar a una larga depresión hasta 2013, cuando se produce el cambio de ciclo. Así, el PIB ha crecido desde el cuarto trimestre de 2013 hasta finales de 2019 a un ritmo del 2,67%, lo cual es relativamente aceptable considerando el contexto de la Eurozona, que ni siquiera llega al 2% desde 2013 (Eurostat 2020).

Ahora bien, ¿qué nos encontramos detrás de esta evolución macroeconómica? La tasa de beneficio, calculada a partir del excedente neto de explotación y el stock de capital neto no residencial, descendió un 23% hasta 2008. Y no sólo eso, sino que siguió descendiendo en los años de la larga depresión hasta 2013, año en el que toca fondo, tras una caída del 43%. Si los cálculos excluyen los sectores de las administraciones públicas y servicios sociales y, sobre todo, el ámbito de la actividad financiera e inmobiliaria —brevemente, pensemos en que incorporan cierta actividad improductiva, o en gran medida vinculada al auge especulativo de la burbuja inmobiliaria, o directamente no tienen un carácter mercantil—, la rentabilidad del capital revela una evolución todavía peor: caída del 45% hasta 2008, y del 58% hasta 2014.

Frente a las concepciones ortodoxas, pero también heterodoxas, de raíz postkeynesiana, la economía española ha tenido un problema de insuficiente capacidad de generar excedente, es decir, una crisis de rentabilidad que emana de su aparato productivo (remito al análisis más extenso en mateo, J.P., *The Theory of crisis and the Great Recession of Spain*, Londres: Palgrave).

Sabido es que las economías de la periferia de la Eurozona (Portugal, España, Italia y Grecia) han sido especialmente golpeadas por la gran crisis del siglo XXI.

Vuelta al crecimiento

Durante la recuperación posterior, la tasa de ganancia del total de la economía sólo ha llegado a alcanzar en 2017 —último año disponible— el 65% del nivel de 1995, mientras que en el ámbito que podemos denominar como productivo, ni siquiera llega a la mitad. Parece poco probable, pues, que en los siguientes dos años haya existido una recuperación destacable. Si la rentabilidad —motor de la inversión y el crecimiento— en modo alguno se ha recuperado, ¿qué cabe esperar de la inversión?

Durante el auge previo a la Gran Recesión, la FBCF llegó a superar el 30% del PIB en 2006 y la primera mitad de 2007, aunque poco más de la tercera parte de esa inversión correspondía a activos residenciales, y algo más del 8% además se materializaba en otros activos de la construcción —una parte de ellos, participando del ciclo especulativo, y no tanto respondiendo a una necesidad social. Tras el colapso del sector de la construcción, a finales de 2019 la FBCF en viviendas está por debajo del 6% del PIB, es decir, como sucedía en la primera mitad de 1995, antes de la burbuja inmobiliaria.

Ahora bien, después de que esta partida de la inversión fuera inferior al 4% en 2013, el crecimiento económico posterior ha vuelto a reactivar la actividad de la construcción, por lo que la tendencia es ascendente, así como los precios de la vivienda en las grandes ciudades. Además, es preocupante que la FBCF no residencial permanezca estancada desde el inicio de esta fase de crecimiento: en 2013 oscilaba en torno al 13,5% del PIB, y aunque posteriormente llega a alcanzar el 14% en 2014 (desde el segundo trimestre), y entre mitad de 2018 y el tercer trimestre de 2019, a finales de este año vuelve a descender hasta el 13,8% del PIB. Si la FBCF no residencial pasó del 16 al 18% del PIB hasta la crisis, la recuperación posterior en el último ciclo no ha significado ningún incremento de la misma, pues oscila en torno al 13-14% del PIB.

El resultado, como cabría esperar, es tremendamente negativo en términos de productividad. En verdad, España vuelve a reproducir su dinámica de crecimiento extensivo, propio de los años de la burbuja inmobiliaria. Entre 1995 y 2007, el VAB por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo apenas se incrementó un

3,6% en total (en 12 años de crecimiento algo), con el agravante de que la dinámica sectorial de la productividad todavía fue peor.

En pocas palabras, España tuvo en general un comportamiento productivo peor que el resto de los países de la Eurozona excepto en los sectores financiero e inmobiliario —ergo, actividades que parecen conformar la ventaja ‘comparativa’ española. Así pues, si descontamos los sectores no productivos, resulta que el resto de la economía experimentó una leve caída de su nivel de productividad del 0,8% en esos años.

Con la crisis y la excepcional capacidad de eliminar empleo, los índices de productividad crecieron, aunque se trata del denominado efecto composición —como ocurre con los salarios, el nivel general se incrementa por el descenso del denominador, y también por el hecho de que el desempleo incide sobre las actividades más intensivas en trabajo y menor nivel absoluto de productividad. Sin embargo, la reanudación de la expansión no ha hecho sino reproducir el mismo esquema regresivo. En efecto, entre 2014T1 y 2019T4, la productividad crece a un ritmo del 0,05% anual, aunque en relación a las horas de trabajo —olvidemos por un momento la generalización de horas extraordinarias—, al menos alcanza el 0,42% anual.

la economía española ha tenido un problema de insuficiente capacidad de generar excedente, es decir, una crisis de rentabilidad que emana de su aparato productivo

Es cierto que se crea empleo, pero parece que el desempleo estructural será muy elevado. Todavía en este último trimestre de 2019, la tasa de paro alcanzaba el 13,78% (INE, Encuesta de Población Activa). Pero téngase en cuenta que a principios de 2013, esta tasa rozaba el 27%, por lo que se ha reducido a la mitad en casi 7 años. Desde otra perspectiva, en el último trimestre de 2019 había un 7% menos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo respecto de principios de 2008. En este contexto, poco

cabe esperar de los salarios. El salario por hora ha crecido al 0,1% anual entre 2014T1 y finales de 2019, y 0,07% la remuneración por persona —aunque cae si lo calculamos en relación a los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

En definitiva, la crisis que se avecina actualmente acecha en medio de una gran debilidad económica, pues todavía después de un ciclo alcista relativamente prolongado, los ecos de la Gran Recesión no sólo se oyen, sino que se sienten en la economía española, sobre todo para el conjunto de los trabajadores. Y es que esta fase de crecimiento no se ha apoyado en una reconfiguración estructural de las condiciones de valorización del capital. Más bien, descansa en precarias bases, es decir, en factores contingentes, en el sentido que se corresponden a una modificación de elementos coyunturales, como la reducción del coste de financiación y una mayor laxitud por parte del BCE, abaratamiento de insumos como el petróleo, demanda externa, a lo cual se debe añadir la degradación salarial. Por tanto, no cabe hablar tanto de factores estructurales que posibiliten una capacidad productiva acrecentada.

En estas condiciones, parece claro que la pertenencia a la Eurozona constituye un bloqueo absoluto para el avance económico y social de España. Cada vez más nitidamente se revela su papel de mecanismo de disciplinamiento de la clase trabajadora, condenando a España a una especialización en actividades de bajo nivel productivo, lo que impide una mejora sostenida de las condiciones de vida de la mayor parte de la población.

* España, Universidad Complutense de Madrid.



GEOPOLÍTICA ENERGÉTICA DE ESTADOS UNIDOS EN NUESTRA AMÉRICA

ANIBAL GARCÍA FERNÁNDEZ*

En 2012, Estados Unidos diseñó una estrategia energética de largo plazo llamada *Conectando las Américas 2022* (CA2022). Propone conectar energéticamente al continente, aumentar la capacidad de generación eléctrica, abrir el mercado energético de Nuestra América, destruir a las empresas paraestatales de energía y “mejorar el clima de negocios”, lo que se traduce en Programas de Ajuste Estructural (PAE). Esto como parte de una estrategia global por controlar el mercado petrolero y gasífero. Ello explica en cierta medida, la política de EE.UU. contra Rusia, Irán y Venezuela.

para EE.UU. pues permitirá la salida del gas no convencional por mar y tierra, y la venta de tecnología como el *fracking*, altamente contaminante. La CA2022 modifica al Estado y a la estructura energética de Nuestra América, haciéndonos consumidores de gas natural licuado y forma parte de la política hegemónica estadounidense en la región, ante el avance chino y en menor medida ruso en los sectores energético e infraestructura.

La estrategia estadounidense tiene tres grandes proyectos: conexión entre Estados Unidos-México-Centroamérica-El Caribe, conexión andina entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile y la conexión del Cono Sur.

La estrategia estadounidense tiene tres grandes proyectos: conexión entre Estados Unidos-México-Centroamérica-El Caribe, conexión andina entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile y la conexión del Cono Sur. Vincula al Departamento de Estado, de Energía y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Incluye al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y a la Organización de los Estados Americanos [https://cutt.ly/FtWN96e, p. 1]. Se engarza con tratados de libre comercio como el renovado T-MEC, así como con acuerdos subregionales como la Alianza del Pacífico.

Ésta es una de las estrategias de alto nivel

Integración energética latinoamericana

Uno de los objetivos de EE.UU., por lo menos desde los setenta del siglo XX, es y ha sido abrir los principales mercados energéticos so pretexto de su seguridad nacional. El primer círculo lo conforman Canadá, EE.UU. y México. En 2010, México y EE.UU. emitieron la “Declaración para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI”. Dicho proyecto incluyó la generación e interconexión de electricidad y la exploración y explotación segura y eficiente de agua e hidrocarburos (petróleo y gas).

México y Centroamérica cuentan con acuer-

dos en el sector eléctrico y gas. En 2015, México aprobó la creación de un gasoducto que pasaría por Honduras, Guatemala y El Salvador. La Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad están impulsando la integración energética de México con Centroamérica mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) [https://cutt.ly/ztw0rhe]. Este proyecto es parte de un programa mucho mayor denominado Proyecto Desarrollo e Integración Mesoamérica, continuación del Plan Puebla-Panamá. Falta aún terminar la conexión por ductos, pues en septiembre de 2019 comenzó a operar el gasoducto Texas-Tuxpan, con el que se pretende conectar el sur del país con Centroamérica.

Uno de los rubros que forman parte de la Alianza del Pacífico es el sector energético, con lo cual se pretende conectar Colombia y Ecuador, la construcción de una línea de transmisión eléctrica entre Ecuador y Perú, y la conexión entre Perú y Chile que cuenta con financiamiento del BID. Esta interconexión concretaría el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SIEA). En 2018, el gobierno chileno, junto con el Banco de Desarrollo de América presentaron un estudio sobre las alternativas de la armonización y conexión eléctricas con Argentina. En 2019, Perú, Colombia y Ecuador, y hasta ese momento Bolivia como observador, analizaron la armonización de los sistemas eléctricos. Estos proyectos a su vez, eran parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) [https://cutt.ly/itvBKLw].

En el Cono Sur, la integración avanza sobre todo desde la mayor presa productora de electricidad del mundo: Itaipú. La integración entre Argentina y Brasil no es nueva, tiene más de tres décadas funcionando. Sin embargo, la interconexión avanza vinculando a ambos países vía gasoductos desde el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, Argentina, hacia Brasil.

Infraestructura y recursos estratégicos

Hay dos elementos de vital importancia que complementan la estrategia de conexión energética, la construcción de infraestructura y los

Uno de los objetivos de EE.UU., por lo menos desde los setenta del siglo XX, es y ha sido abrir los principales mercados energéticos so pretexto de su seguridad nacional.

recursos estratégicos latinoamericanos, presas del capital financiero-petrolero extranjero.

En primer lugar, la estrategia “América Crece”, que comenzó con la administración Trump, pretende implementar una serie de acuerdos entre empresas privadas estadounidenses y gobiernos latinoamericanos para la construcción de infraestructura energética. Desde diciembre de 2019, incluye también proyectos de comunicación, ciberseguridad, modernización de puertos, carreteras, aeropuertos, o sea, infraestructura necesaria para movilizar mercancías. Participan la USAID, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos y la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero, que cambió su nombre a Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos [https://cutt.ly/Wtw9yL4].

Uno de los casos más llamativos es el de Brasil que, a raíz del golpe de Estado a Dilma, con los gobiernos de Temer y Bolsonaro, el país se puso a la venta. Según el Programa de Asociación de Inversión [https://www.investidorpetrobras.com.br/], hay licitaciones para concesiones de trece aeropuertos. Se han llevado a cabo seis rondas de licitación petrolera para el pre-sal bajo la forma de producción compartida. Han participado Exxon, Shell, Chevron, por mencionar algunas. Se suma la venta de refinerías, para lo cual, Petrobras contrató a Citigroup para vender 50% de su capacidad de refinación: 1.1 millones de barriles por día, perdiendo soberanía energética, y la venta de activos en Colombia y Uruguay.

La disputa por la infraestructura entre China y EE.UU. en el Caribe, muestra a esta subregión

como prioritaria para la geopolítica energética estadounidense que pretende construir presas hidroeléctricas, sobre todo en República Dominicana, y centrales de gas natural licuado que se conecten vía marítima con Panamá que será centro logístico para Centroamérica. Por otro lado, fomenta la diversificación energética hacia energías renovables que estarán aglutinadas en la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe y la Estrategia 2020 para El Caribe.

Virus y petróleo

Desde que en enero de 2020 se supo del coronavirus (COVID-19), las repercusiones económicas eran de esperarse. China, punto original del virus, comenzó a reducir su demanda de petróleo. Ante esta ralentización de la economía china y la simultánea expansión del virus hacia Europa y EE.UU., era cuestión de tiempo que la demanda petrolera comenzara a bajar y lo mismo será para otros países que ya registrar cientos de infectados. Sin embargo, las alertas de recesión y crisis económica vienen desde hace años.

PRECIO DEL PETRÓLEO (2007-2020) (dólares por barril)



Fuente: Investing

Hay dos elementos de vital importancia que complementan la estrategia de conexión energética, la construcción de infraestructura y los recursos estratégicos latinoamericanos, presas del capital financiero-petrolero extranjero.

COLOMBIA: EXPLOSIÓN DE DEMANDAS DE INVERSORES EXTRANJEROS

BETTINA MÜLLER*

En 2019, Rystad Energy, empresa de inteligencia energética de Noruega, alertó que en 2020 el panorama para los precios y producción de petróleo no sería bueno debido a la recesión económica y a la guerra comercial entre China y EEUU, además del plan de la OPEP+. Por otro lado, los informes sobre la caída de producción del gas y petróleo de esquisto en Texas harían bajar la producción estadounidense [<https://cutt.ly/ztiqrbrg>]. La cereza del pastel fue la reunión de la OPEP+ el pasado 6 de marzo, donde no se llegó a un acuerdo con Rusia para bajar la producción. El lunes 10 de marzo el mercado petrolero se desplomó dejando el barril en 34 dólares, el 23 de marzo se ubicó en 23 dólares y el 26 igual, con variaciones en los distintos tipos de petróleo. Esta caída en los precios tendrá repercusiones en los presupuestos de los países productores, como el caso de México, Venezuela, Brasil y Ecuador, que aprovechó la coyuntura para aplicar el ajuste del FMI.

A pesar de la contingencia por COVID-19, las resistencias en el mundo no dan marcha atrás, como en Chile, Colombia, Brasil y Haití. Y más recientemente en Italia, el sindicato metalúrgico FIOM decidió irse a huelga “por dignidad” y para mejorar las condiciones sanitarias de las industrias. Como dijo Gioconda Belli, ante la emergencia internacional “la solidaridad es la ternura de los pueblos” y Cuba sigue siendo ejemplo de ello, a pesar del bloqueo infame.

* México, GT *Crisis y Economía Mundial* y GT *Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global*

En 2018, Colombia fue el país más demandado ante tribunales de arbitraje privados por parte de corporaciones transnacionales. Desde el principio del nuevo milenio, los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos apuraron la firma de tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, abriéndoles así la posibilidad a empresas mineras, entre otras, de demandar al país por sumas multimillonarias.

Colombia se subió tarde al tren de la firma de tratados bilaterales de inversión (TBI) en comparación con otros países en la región, el grueso de los tratados de inversión no se firmaron hasta inicios de los 2000. Es por eso que tiene relativamente pocos TBI. Pero una vez que arrancaron, los gobiernos colombianos apretaron el acelerador. Mientras que en la mayoría de los países del mundo a partir del cambio de milenio se ponía un freno a la firma de TBI, Colombia avanzaba sin considerar los riesgos que este tipo de tratados conlleva.

En 2018, Colombia fue el país más demandado ante tribunales de arbitraje privados por parte de corporaciones transnacionales.

Hasta la fecha, Colombia tiene vigentes seis TBI y ocho Tratados de Libre Comercio con capítulo de protección de inversiones que permiten arbitraje inversor-Estado. Quiere decir que le otorgan el derecho exclusivo a inversores extranjeros a demandar al Estado (en ese caso

colombiano) ante tribunales de arbitraje internacionales. El más usado de dichos tribunales es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI) del Banco Mundial. Las razones por dichas demandas pueden ser múltiples. A menudo se refieren a nuevas regulaciones estatales con respecto a la protección ambiental, climática y de recuperación de soberanía económica. En el caso de Colombia la mayoría de las demandas está vinculada al sector minero y decisiones estatales relacionadas a la protección ambiental y la salud de su población.

No obstante, los gobiernos colombianos de las últimas dos décadas han avanzado en la firma de nuevos TBI, 10 de los cuales ya están firmados, pero aún esperan ratificación para entrar en vigor. Es interesante destacar que la ratificación de los TBI pendientes tiene que contar con la aprobación de la Corte Constitucional de Colombia.

Colombia también ha demostrado interés en sumarse al Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido ahora como TPP-11, que entró en vigor a fines de 2018. Actualmente, 11 países forman parte de dicho tratado -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam. Cabe mencionar que el gobierno de Colombia también ha comenzado el proceso de adhesión al Tratado sobre la Carta de Energía (TCE), considerado el tratado de protección de inversiones más peligroso del mundo. El TCE, un tratado de los años 90s, usado hasta el momento para iniciar 128 demandas contra Estados, garantiza a los inversores extranjeros en el sector energético amplios derechos

para demandar directamente a los Estados ante tribunales internacionales.

Colombia: el país más demandado en 2018

En 2018, Colombia fue el país más demandado a nivel mundial, habiéndose registrado seis demandas en su contra. En total, desde 2016 hasta Octubre 2019, Colombia ha recibido 13 demandas de parte de inversores extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional (Es de mencionar que el informe en el cual se basa este artículo cerró a fines de octubre 2019. Desde entonces el país ha recibido 2 demandas más, llevando el total a 15 demandas contra Colombia.). Eso significa que por año ha recibido en promedio 3,7 demandas. Ni Argentina, el país más demandado del mundo, tiene un promedio tan desfavorable.

el gobierno de Colombia también ha comenzado el proceso de adhesión al Tratado sobre la Carta de Energía (TCE), considerado el tratado de protección de inversiones mas peligroso del mundo.

El total de esas demandas contra Colombia fueron presentadas por inversores de Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero el 70% de todas las demandas contra el país provienen de inversores norteamericanos, más específicamente de Estados Unidos y Canadá, en su mayoría empresas mineras y petroleras. Pero las empresas que demandan también vienen de sectores como información y comunicación, servicios financieros y de seguros y construcción y suministro de electricidad.

Además de las 13 demandas de arbitraje conocidas, el Gobierno ha revelado que existen nueve amenazas de demandas que aún no han llegado a tribunales porque el gobierno está negociando un arreglo directamente con el inversor. Mas allá de los pagos que pueda hacer el

Estado al inversor para evitar que la demanda se concrete, otro gran riesgo es el del enfriamiento regulatorio, o sea que el Gobierno aplaze, modifique o no avance con nuevas leyes para evitar ser demandado e incurrir en los altos costos financieros que estos procedimientos implican. Una de las amenazas de demanda conocidas contra Colombia fue la del gigante farmacéutico suizo Novartis. Cuando en 2015, Colombia declaró un medicamento contra el cáncer de interés público para reducir el precio, el gigante farmacéutico Novartis amenazó con demandar ante un tribunal de arbitraje internacional y el Gobierno desistió de tocar el monopolio.

Colombia se está acercando a la “élite” de los cinco países más demandados ante tribunales de arbitraje en América Latina y el Caribe que hoy está compuesta por Argentina (62 demandas), Venezuela (52), México (33), Ecuador (25), Bolivia (17) y Perú (17).

El costo de las demandas

Hasta el momento solo una demanda contra Colombia ha sido resuelta y el resto de los casos se encuentran pendientes. En la demanda iniciada por Glencore en 2016, el Tribunal resolvió a favor del inversor y ordenó a Colombia a pagar US\$ 19 millones. Se trata de la primer demanda de arbitraje de Colombia y está relacionada a la concesión de la mina de carbón Calenturitas.

Según esas 12 demandas pendientes, los inversores piden casi US\$ 22.000 millones de compensación, equivalente al 26% del presupuesto entero colombiano en 2019 y casi dos veces el presupuesto de educación para este mismo año. Vale mencionar que aún no se conoce el valor reclamado por el inversor en la última demanda contra Colombia, razón por la cual el monto en realidad es aún mayor.

La gran parte de estos US\$ 22.000 millones se debe a la demanda de la empresa estadounidense Cosigo Resources, que reclama US\$ 16.500 millones por la cancelación de un permiso de exploración y explotación de una mina de oro en el sur de Colombia que luego fue declarada reserva natural.

La conclusión que se impone

A pasos agigantados Colombia se está acercando a la “élite” de los cinco países más demandados ante tribunales de arbitraje en América Latina y el Caribe que hoy está compuesta por Argentina (62 demandas), Venezuela (52), México (33), Ecuador (25), Bolivia (17) y Perú (17). Juntos, esos países representan 3/4 de todas las demandas contra la región. El peso económico de esas demandas y el endeudamiento externo que fomentan, no es de subestimar.

Para evitar una avalancha de demandas, Colombia debería revisar su política de liberaliza-

ción económica a través de la firma de tratados que incluyen arbitraje inversor-Estado. Además de investigar las consecuencias económicas, políticas y sociales que conllevan los tratados que ya tiene en vigor, tal como lo hizo Ecuador en el 2013 con la conformación de una Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA).

*Alemania/Argentina, politóloga, trabaja sobre comercio e inversiones en el Transnational Institute (TNI). Este artículo se basa en el informe “Colombia ante una explotación de demandas inversores extranjeros”, publicado por el Transnational Institute en Febrero 2020. Se encuentra online: <http://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/colombia/>



LA LUCHA FEMINISTA EN NUESTRA AMÉRICA MARZO 2020

MARINA MACHADO GOUVÊA*

Las protestas del 8 de marzo en América Latina y el Caribe ponen al movimiento feminista como uno de los más combativos en la actualidad. Hay que disputarlo con concepciones que, desde el mismo feminismo, no ven la necesidad de superar al capitalismo para derrocar la desvalorización del género femenino. Sin embargo, contiene el brote de nuevas prácticas políticas, más comunitarias y menos mercantiles, basadas en el cuidado.

En la semana del 8M se ha precipitado una nueva oleada de la crisis orgánica capitalista, con la caída del petróleo y de las bolsas de valores en el orbe. Dicha crisis se va a profundizar sin precedentes con la difusión de la COVID-19, que impacta en mayor medida a las mujeres, especialmente las no-blancas.

Las mujeres somos 70% de lxs trabajadorxs de la salud en el mundo (UNFPA, 2020), a menudo en los puestos más sujetos al contacto desprotegido con lxs pacientes.

Las mujeres somos 70% de lxs trabajadorxs de la salud en el mundo (UNFPA, 2020), a menudo en los puestos más sujetos al contacto desprotegido con lxs pacientes. En la cuarentena, sufrimos con la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidado –realizamos el 75% del trabajo de cuidado no pagado en el mundo (OXFAM, 2019)– y con la violencia en nuestros propios hogares –el 53% de las mujeres en 12 países latinoamericanos afirma haber sufrido violen-

cia física o sexual por un compañero íntimo (OMS, 2019). Somos las más vulnerables a la profundización de la crisis, de tener las peores condiciones de venta de nuestra fuerza de trabajo –somos el 60% del ejército industrial de reserva y tenemos mayor tasa de informalidad (OIT, 2019).

En 2020, el 8M se suma a la resistencia general

Dialécticamente, las mujeres vienen tomando cada vez más conciencia colectiva sobre su explotación y opresión, sobre la generificación de la división social del trabajo y sobre su impacto en la construcción de afectos y del deseo.

de la clase trabajadora contra la ofensiva burguesa que nos aplasta desde 2007-2008 (en la reconfiguración de la acumulación frente a la crisis) y que se ha endurecido/recrudescido entre 2016 y 2019, con el avance del neofascismo y del neoconservadorismo en el mundo y el endurecimiento de la disputa entre EE.UU. y China. Dicho recrudescimiento agudiza la división sexual (generificada) racial y territorial del trabajo, acentuando la lógica patriarcal y racista de la reproducción capitalista. No es circunstancial, sino que necesaria a la reproducción capitalista, en triple sentido:

1) a través de la misoginia, del racismo, de la xenofobia, de la homofobia y transfobia, aporta a la desvalorización de la fuerza de trabajo, rebaja los salarios más allá de este valor y al aumento de la jornada y de la intensidad del trabajo, ampliando las tasas de plusvalor durante la crisis capitalista;

2) en el caso específico de las mujeres y del trabajo generificado tomado como “femenino”,

oculta y desvaloriza al trabajo de cuidado, realizado en gran medida gratuitamente en la esfera privada y, cuando mercantilizado, con salarios bajísimos, rebajando los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo en general;

3) el crecimiento del neoconservadorismo, el incremento del odio a grupos sociales y su desvalorización social son necesarios al bloque en el poder, para promover la expropiación y retirada de derechos requerida por las clases dominantes en esta reconfiguración, que no podría ser llevada a cabo con esta velocidad por gobiernos dichos “populares” y “democráticos”.

Dialécticamente, las mujeres vienen tomando cada vez más conciencia colectiva sobre su explotación y opresión, sobre la generificación de la división social del trabajo y sobre su impacto en la construcción de afectos y del deseo. En este escenario se insertan las gigantescas protestas del 8M en algunos países de Nuestra América.

Este 8 de marzo, escuchamos las voces de millones de mujeres: en Chile, han salido 2 millones, que tienen rol protagónico en la revuelta popular y han aportado a visibilizar la violencia contra las mujeres, con *Un violador en su camino*; en Argentina, cientos de miles mantuvieron la lucha en la calle, que parió la conocida lucha de los pañuelos verdes por el derecho al aborto; en México, el 8M fue la más grande marcha de los últimos años, reuniendo casi un millón de mujeres contra el feminicidio; en Brasil, fuimos las mujeres las protagonistas del #elenão, principal consigna contra Jair Bolsonaro.

En todos los rincones de Nuestra América arde la lucha feminista. Las consignas de la sororidad y del cuidado adquieren nueva dimensión, embarazada de nuevas prácticas políticas. Aún mismo en la sociedad capitalista y en camino hacia su superación.

* Brasil, GT Crisis y Economía Mundial

EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN EL EMPLEO

LUCAS CASTIGLIONI*

Los efectos de la pandemia del Coronavirus se encuentran en pleno desarrollo. Caída de las bolsas, contracción del comercio, retracción de la economía mundial, de las inversiones y otros indicadores que reflejan una profundización de la crisis global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó un estudio preliminar del impacto del COVID-19 en trabajadores y trabajadoras, en el que distingue tres efectos: (i) sobre la cantidad de los empleos (aumento del desempleo y del subempleo -reducción de horas de trabajo); (ii) sobre la calidad de los empleos (caída de los salarios y empeoramiento en acceso a la protección social); y (iii) sobre grupos de trabajadores vulnerables a "cambios en el mercado laboral" (jóvenes, mujeres y migrantes). Y estiman un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones (hipótesis "prudente") y 24,7 millones (hipótesis "extrema") en este 2020.

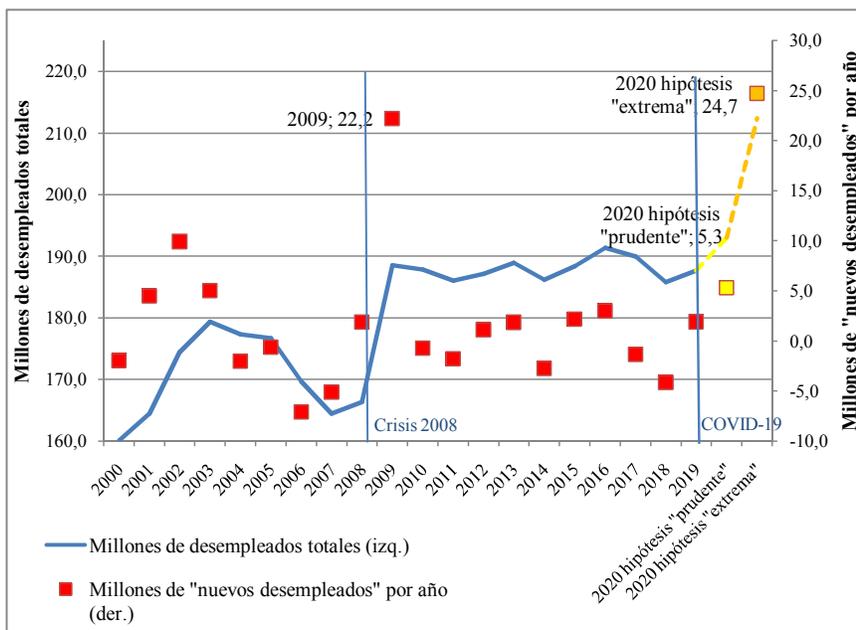
COMITÉ
**EDI-
 TO-
 RIAL:**

**Gabriela Roffinelli,
 Josefina Morales y
 Julio Gambina**

Las notas son
 responsabilidad de
 los autores.

Diseño Editorial:
Verena Rodríguez

Gráfica 1



* Argentina, GT *Crisis y Economía Mundial*, FISyP.